

EL PAPEL DE LAS CORPORACIONES TRASNACIONALES EN LA EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GEOECONÓMICOS, GEOPOLÍTICOS Y GEOESTRATÉGICOS DEL ALCA

Yenisey Rodríguez Cabrera*

I. LA POLÍTICA COMERCIAL EXTERNA DE ESTADOS UNIDOS EN AMÉRICA LATINA

Si bien es cierto que en la creación y organización de la política exterior de las grandes potencias en general y la de los Estados Unidos en particular imperan lineamientos que le dan cierto cariz de *continuidad*, cualidad que muestra la capacidad de proyección de poder y posicionamiento internacional a futuro de su clase política, no lo es menos que la política exterior se configura y ejecuta atendiendo a los requerimientos inmediatos de la propia política interna. Así, ya sea como herramienta para desviar la atención de los ciudadanos sobre problemas económicos o políticos del país o ya sea como instrumento para paliar dificultades económicas circunstanciales, la política exterior estadounidense se ha caracterizado por su capacidad para adaptarse y conformarse según las exigencias coyunturales aunque, dicho sea de paso, sin abandonar ciertas líneas generales que trascienden la temporalidad y la orientación partidaria, que no política, del gobierno en turno.

El cambio estratégico global experimentado a partir de la crisis capitalista de la década de los setenta, que devino crisis de sucesión hegemónica¹, ha urgido a los gobiernos estadounidenses de las tres últimas décadas a tomar decisiones sobre los ajustes necesarios en su política exterior hacia América Latina a fin de mantener su hegemonía regional y proyectar su poder hacia el mundo. Uno de los cambios más importantes es el relacionado con la conformación y ejecución de una nueva política comercial externa que al mismo tiempo que resuelva las contradicciones al interior de la propia economía, sirva para

¹ Cabe decir que la hegemonía en las relaciones internacionales está entendida en ciertos términos: no está determinada sólo por la condición de que un país sea el más rico del mundo sino por la influencia que éste pueda ejercer sobre otras economías y por la capacidad de sobresalir en la disputa entre los países poderosos que compiten por la influencia sobre los territorios estratégicos y países viables para tener acceso a recursos naturales indispensables para el correcto funcionamiento de la maquinaria capitalista. Como en la actualidad las largas y tensas negociaciones entre las grandes potencias para determinar las reglas que rigen las relaciones económicas y financieras en el mundo muestran que no existe un liderazgo claro ni una exclusividad del poder por parte de un solo Estado, se evidencia no una hegemonía clara sino una especie de *multipolaridad*. Así, si bien los Estados Unidos son aún una enorme potencia militar, tienen que aceptar compromisos y zonas de influencia de otros países en expansión en todos los ámbitos. Esto ha dado pie a una situación que algunos estudiosos denominan *crisis de sucesión hegemónica*.

satisfacer los intereses geopolíticos y geoeconómicos que le permitan posicionarse mejor en el concierto internacional.

Para mejor entender las razones por las que la política exterior norteamericana de los últimos años ha privilegiado el tema del comercio en sus relaciones con América Latina y cómo éste se inscribe no tanto en el campo del mero intercambio de bienes y servicios como en las esferas de la geopolítica y la geoeconomía, así como para aclarar la forma en que el funcionamiento pleno de un sistema comercial en el hemisferio se inscribe en el proyecto geoestratégico norteamericano, es necesario exponer primero, la situación de vulnerabilidad estratégica que atraviesa la Unión Americana; después, la forma en que el libre comercio contribuye a reducir esta vulnerabilidad; finalmente, el papel de las corporaciones transnacionales como los principales agentes del libre comercio en América Latina.

1. Los ajustes de la política exterior norteamericana frente a la vulnerabilidad estratégica

El cambio estratégico global que siguió al fin de la guerra fría afectó la situación regional en varios sentidos. La intensificación de la competencia económica-financiera entre los principales polos de poder y la desaparición del bloque soviético y del “socialismo” como una alternativa al capitalismo, por un lado y una situación económica y política latinoamericana mucho más compleja que en tiempos de la Guerra Fría, por otro, ubican a la región en una circunstancia distinta a los ojos de los Estados Unidos y permiten que las presiones hegemónicas de ese país se exacerben. La posguerra fría desató fuerzas y condiciones geoestratégicas que redefinen el trato de esa gran potencia hacia América Latina.

Sin lugar a dudas, los ajustes en el capitalismo global ocurridos desde principios de la década de los setenta fueron más severos para los países con economías más débiles. De manera muy irresponsable, los gobiernos de los países latinoamericanos contrataron enormes créditos durante los últimos años de la década citada dada la abundancia de capitales en el circuito internacional y lo barato que resultaba contraerlos. Sin embargo, aunque las tasas de interés con las que se contrató ese dinero eran relativamente bajas, también eran variables. Así, cuando en 1981 la administración de Ronald Reagan aumentó el gasto público financiándolo a través de préstamos del mercado de dinero y no con un aumento de impuestos o creación monetaria porque se dispararía la inflación norteamericana, las tasas de interés aumentaron y el dólar se sobrevaluó. Esto provocó el aumento de las tasas de interés a nivel mundial y esto a su vez repercutió en el monto del servicio de deuda de los países de América Latina. En 1982, América Latina debía a la banca privada internacional más de 300 mil millones de dólares. (Schatan, 1998: 22)

Debido al enorme monto de la deuda, el sistema financiero internacional —manejado por la banca privada de un puñado de países— estaba en peligro de colapsarse. Esto fue impedido por los gobiernos de los grandes potencias a partir del establecimiento de *programas de ajuste estructura* (PAE), monitoreados directamente en los países latinoamericanos por miembros del FMI. El ajuste estructural en América Latina se convirtió entonces en el conjunto de medidas económicas mediante las que la banca privada mayoritariamente norteamericana aseguraba el crecimiento económico de los países deudores para que las deudas pudieran ser pagadas con mayor rapidez al mismo tiempo que las corporaciones transnacionales aseguraban la venta de sus exportaciones en los mercados latinoamericanos. De acuerdo a Mercedes Agudelo, un Programa de Ajuste Estructural incluye las siguientes medidas: devaluación de la moneda, liberalización del mercado de cambios, promoción de las exportaciones, reducción de la demanda interna para liberar recursos para la exportación, reducción general de créditos, recortes en los subsidios, reducción de los servicios sociales, **desmantelamiento de las empresas paraestatales**, reducciones en el personal del sector público y la reforma fiscal. (1997; 53).

Los PAE fueron el vehículo ideal mediante el cual los Estados Unidos pudieron establecer en América Latina una especie de gobiernos paralelos que no rinden cuentas a nadie en el ámbito nacional y que pasan desapercibidos a los ciudadanos. La administración pública de los países latinoamericanos pasó así directamente a funcionarios extranjeros que operan de acuerdo a los intereses del capital transnacional norteamericano, pues a través de los PAE, los Estados Unidos siguen ejerciendo el dominio en los

intercambios económicos y políticos. Este poder se ejerce en términos militares, financieros, tecnológicos y culturales que se materializan en la desnacionalización, desregulación y la privatización.

Entre las medidas del ajuste estructural más nocivas para las naciones latinoamericanas sobresale la privatización de las empresas que eran manejadas por el Estado, entre las que destacaban las que explotaban los recursos naturales en general y los recursos naturales estratégicos particularmente. Aunque la justificación del FMI —representante de los intereses económicos norteamericanos y organismo que recibe la mayor parte de su presupuesto de los Estados Unidos, donde además tiene su sede— para privatizar las empresas se basaba en la consideración de que el Estado se debe retirar de la actividad económica, hecho que no sucede en el caso estadounidense, donde el Estado interviene de forma permanente para promover a las corporaciones transnacionales en el exterior utilizando recursos públicos, lo cierto es que fue la medida esperada durante largos años por el gobierno norteamericano para “recuperar” con legalidad lo que los gobiernos populistas nacionalizaron en décadas pasadas.²

Las corporaciones transnacionales se convirtieron de esta forma en uno de los vehículos centrales para continuar el expansionismo norteamericano en la región. La historia de las nacionalizaciones de los años treinta y cuarenta le habían mostrado a los artífices de la política exterior norteamericana el obstáculo en el que se puede convertir un Estado fuerte³. Por eso era importante dejar fuera de la administración pública las empresas de los rubros que más le interesaban. De esta forma, con la privatización de las empresas estatales, las decisiones económicas de carácter estratégico quedaban fuera del alcance de los gobiernos latinoamericanos, pues se privatizaron los sectores más dinámicos y estratégicos de las economías de América Latina: el del petróleo, el minero, el de la petroquímica, el de las telecomunicaciones, los ferrocarriles, la electricidad, los puertos, etc., que pasaron directamente a manos de corporaciones transnacionales. Así fue como se privatizó la minera más grande del mundo, Vale Do Rio Doce (VDRD) de Brasil, la petrolera Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvs) ⁴, Telmex, Sicarta y Ferronales en México, parte de Ecopetrol en Colombia, etc.

Las razones por las cuales los Estados Unidos están acaparando los sectores geoestratégicos de los países latinoamericanos se encuentran en el hecho cada vez más evidente de que la economía norteamericana enfrenta un serio problema de abastecimiento de recursos naturales. Esta situación de **vulnerabilidad estratégica** se traduce en la dependencia norteamericana de materias primas esenciales para el funcionamiento del capitalismo global: petróleo, gas, sustancias petroquímicas, acero, manganeso, níquel, platino, estaño, zinc, bauxita, berilio, cromo, cobalto, mercurio, titanio, cobre, etc. Esta incertidumbre en la disponibilidad de materias primas hace más difícil las relaciones entre los países latinoamericanos y su vecino del norte, pues la situación lo hace propenso a controlar y apropiarse las secciones geoestratégicas más importantes, como los yacimientos de gas y los petroleros, la cuenca amazónica, el Caribe, etc. y si bien es cierto que ni la preocupación por hacerse de estas zonas ni las intenciones de apropiárselas son nuevas, no es menos verdadero que el actual contexto de crisis de sucesión hegemónica hace que los Estados Unidos estén más interesados en controlar los puntos más importantes del hemisferio si pretende seguir siendo hegemón en la región y si quiere proyectar su hegemonía hacia el mundo entero.

² Para conocer más de acerca de las nacionalizaciones en las épocas de oro del populismo latinoamericano revisar, entre otros, Carlos M. Vilas, *El populismo latinoamericano: un enfoque estructural*; Thomas Skidmore, *Las dimensiones económicas del populismo en argentina y Brasil*, y Víctor E. Bravo et al. *Alianza de clases y dominación: México, 1930-1946* en, Carlos, Vilas comp., *La democratización fundamental. El populismo en América Latina*, Ed. CONACULTA, Col. Claves de América Latina, México, 1995, pp. 119-149; 219-261 y 309-339. Véase también Francisco Entrena Durán, *México: del caudillismo al populismo estructural*, Ed. EEHA, Sevilla, 1995, 230 pp.; Octavio Ianni, *La formación del Estado populista en América Latina*, Ed. ERA, México, 1975, 177 pp. y Héliog Tindrade, *Una perspectiva del populismo en Brasil* en Guy Hermet et al., *Del populismo de los antiguos al populismo de los modernos*, Ed. COLMEX, México, 2001, 275-300 pp.

³ Entendiendo al Estado como gobierno, no como una relación social.

⁴ Si bien esta compañía no se vendió completamente, si permite la inversión extranjera en ciertos niveles de producción. En 1997 tuvo ventas por 22 mil 120 millones de dólares, lo que la coloca en el primer lugar de las 200 grandes empresas exportadoras en América Latina. VDRD de Brasil se ubica en el lugar 10 de esta lista. La lista completa de las empresas se puede encontrar en Cristina Rosas, *La economía internacional en el siglo XXI*, Ed. FCPyS, México, 2001, p. 215.

Hace ya mucho años, a mediados de la década de los setenta en plena crisis de los energéticos, los laboratorios Battelle-Columbus desarrollaron algo que denominaron *Índice de Vulnerabilidad* en ciertos recursos estratégicos. Este indicador nos puede dar una idea de la importancia que tiene en la política exterior norteamericana el estudio a fondo de las condiciones de los recursos naturales estratégicos más importantes para su supervivencia como gran potencia, ubicados en América Latina. Además nos prueban como una corporación —aunque se vista de organización sin ánimo de lucro⁵—, realiza sus actividades apoyada por el subsidio gubernamental. Este índice incluía varios aspectos a tomar en cuenta para la elaboración de las estrategias de la política exterior: disponibilidad de reservas domésticas; disponibilidad de sustitutos; número y localización de fuentes externas; ideología de suministradores externos; número de productores; capacidad de producción actual y futura; restricciones formales; consumo de energía; tiempo requerido para la producción; usos del Departamento de Defensa estadounidense como porcentaje total para los Estados Unidos (Saxe, s.f.: 23)

William Perry, ministro de Defensa entre 1994 y 1997, aceptaba que la relevancia de América Latina cubre un aspecto muy importante de consideraciones económicas, políticas y militares en la elaboración de la política exterior norteamericana, pues “nuestra dependencia del área para materias primas cruciales como petróleo, hierro, bauxita y manganeso es un hecho obvio de la vida internacional”. (1985:187). Por eso, sigue Perry, la capacidad para proporcionar un nivel adecuado de control y vigilancia en el Mar Caribe, los accesos al Canal de Panamá y las aguas adyacentes del Atlántico y el Pacífico, “es básica para la defensa nacional de USA”. (*Ibid*: 189)

Ante esta situación de *vulnerabilidad estratégica*, los Estados Unidos han encontrado algunas alternativas: en primer lugar, intensificar el uso de los recursos domésticos internos, si es que los poseen; en segundo lugar, aumentar el intercambio comercial, con la implícita desigualdad entre las partes que comercian; en tercer lugar, ocupar materialmente los lugares fuera de sus fronteras donde se encuentran los recursos, ya sea por medios no militares como la privatización y militares, ya sea que estos medios militares sean directos (ocupación del ejército norteamericano) o indirectos (apoyo militar con entrenamiento, armas y asesorías a los gobiernos extranjeros). Como las necesidades de recursos de los Estados Unidos sólo pueden satisfacerse con depósitos localizados fuera de sus fronteras nacionales, la segunda y la tercera alternativas han guiado hasta ahora la política exterior norteamericana hacia América Latina de los últimos años.

b) El Libre Comercio en las Américas

Los cambios en el capitalismo global y la conformación de un nuevo orden mundial estuvieron permeados por un fenómeno económico que alentaba el libre comercio, pero que a diferencia de otros tiempos, cuando se proponía un libre intercambio de bienes y servicios entre distintas naciones de todas partes del mundo, este se circunscribía al área geográfica más cercana. Esta idea de libre comercio, *ad hoc* a la ideología de la nueva derecha⁶ que gobernaba en la mayoría de los países capitalistas, fue retomada

⁵ Los laboratorios Battelle se autodefinen como una corporación sin fines de lucro (nonprofit [non-stock] corporation). Fue creada por Gordon Battelle , un importante empresario de la industria del acero, en 1925 en Ohio bajo el capítulo 1719 de las leyes de ese estado, las cuales permiten la organización con fines caritativos. Según Battelle, su status de corporación sin fines de lucro no la exenta de pagar impuestos locales, estatales y federales. Los laboratorios Battelle tienen un personal que consta de 7,500 científicos, ingenieros y otros especialistas. Cada año, miles de proyectos sobre tecnología están en progreso en varias operaciones comerciales. Estos proyectos son financiados por cerca de 2,000 compañías y el agencias gubernamentales norteamericanas, especialmente el Departamento de Defensa y la NASA. El volumen de las ventas de Battelle se acerca a 1 billón de dólares cada año. Los rubros de la industria dentro de los cuales trabaja son el farmacéutico, el agroquímico, el de la energía, el medio ambiente, los transportes y la salud. Además, trabaja de forma cercana con los sistemas de defensa, la fuerza aérea y la naval. Para mayor información del trabajo de estos laboratorios, consultar la página de Internet <http://www.battelle.org>.

⁶ La ideología de la nueva derecha, como cualquier otra, lleva consigo una carga de valores sobre los cuales se debe construir el tejido social. El primero y el más importante es el valor del orden, entendido en términos de la construcción social de Hobbes, donde la mayor amenaza es la inseguridad. El principal objetivo de vivir en sociedad es el orden, no importando que éste se consiga a costa de la fuerza o mediante mecanismos poco democráticos. Por ello, no pone en cuestión la

por el gobierno norteamericano pero en otro sentido: controlar el comercio del continente americano como otra extensión de su hegemonía en la región.

Según las teorías clásicas liberal del comercio exterior, al conjunto de estrategias y acciones que el Estado elabora para orientar al comercio con otras naciones a fin de conseguir la satisfacción del “interés nacional”⁷, que implica la subsistencia del Estado, el bienestar de la población y la consecución de la seguridad nacional, se denomina *política comercial externa*. Según estas mismas consideraciones, cada Estado decide, en pleno ejercicio de su soberanía los bienes y servicios que intercambiará, además de determinar la cantidad y la clase de mercancías y servicios que pueden entrar y salir del país; todo ello de acuerdo a sus intereses nacionales. Se afirma, además, que cada vez más la seguridad económica de los gobiernos nacionales se asienta en la política comercial externa, que es la que le permite a una nación “bajo condiciones de libre mercado producir e intercambiar bienes y servicios para aumentar la renta de los ciudadanos”(Mandel, 1994: 37), en tanto que, en teoría, a mayor comercio, mayor empleo y mayor bienestar.

Para formular estas estrategias, el Estado debe tomar en cuenta tres aspectos: el destino de las ganancias del comercio, la estructura en la que se va a basar ese comercio y los términos de intercambio.(Krugman, 1990: 25) El destino de las ganancias del comercio exterior es normalmente la prioridad al planear la política comercial externa. Las divisas obtenidas del intercambio comercial se destinan, en teoría, hacia el aumento de la producción o la compra de mayores insumos para seguir produciendo mercancías cuyo destino es la exportación. La estructura en la que se va a basar el comercio exterior es también vital, porque con base en ella, el estado se da cuenta de sus posibilidades de comerciar, ya que esta estructura le va a permitir una menor o mayor producción de bienes y un menor o mayor intercambio de los mismos, lo que finalmente se relaciona con el número de empleos creados para satisfacer las necesidades de una sociedad. Finalmente, los términos del intercambio comercial deben quedar muy claros: el Estado impone o no aranceles, cuotas, reglas técnicas o administrativas y control de cambios a fin de detener o agilizar el comercio internacional, según su conveniencia.

De acuerdo a los teóricos contemporáneos del comercio exterior, la política comercial externa de la actualidad tiene fines más complejos que los que le asignaba la teoría clásica. Para empezar, se ha

dominación ni la desigual distribución de la riqueza, pues cree en la máxima “a cada cual según su mérito”, lo que origina la división de la sociedad en ganadores y perdedores. Como no pone en cuestión la dominación, considera disruptivo cualquier valor o comportamiento que altere el orden. El valor del orden en la globalización intentará conseguir a través de cualquier medio la minimización del conflicto y la maximización del orden. Cuando se enaltecen los valores del orden, los medios democráticos para decidir sobre la vida social se ven disminuidos en tanto que para minimizar el conflicto no hace falta tomar en cuenta la opinión de los demás. Además del orden, la ideología de la derecha está imbuida por el individualismo entendido como lo contrario del comunitario. Se niega todo valor que implique la cohesión de los individuos dentro de su sociedad y se evita que el individuo reconozca su existencia a partir de su pertenencia a un grupo social. Aquí encuentra cabida el discurso norteamericano que defiende los derechos humanos pues éstos captan sólo la experiencia de las culturas e individuos para quienes el ejercicio de la elección personal es más importante que la cohesión social, el control del riesgo económico y otros bienes colectivos. En este tipo de sociedad, el individuo debe hacerse responsable sólo de sí mismo, pues tiene que abrirse camino en un mundo cada vez más “competitivo”. No es en vano que cuando se critica al neoliberalismo, hijo putativo de la nueva derecha, se haga referencia al *darwinismo social*.

⁷ El debate entre la naturaleza particular y nacional del denominado “interés nacional” en los estudios sobre Política Exterior ha sido uno de los más intensos a lo largo del tiempo. Por un lado, están los teóricos tradicionales que argumentan que el interés nacional es formulado desde el gobierno, ya sea por el poder ejecutivo y/o legislativo, atendiendo a las necesidades de la nación para proporcionarle a la población comprendida dentro del territorio estatal, los requerimientos sociales, económicos y políticos que vayan encaminados a preservar, primero la existencia y después la fortaleza del Estado. Dado que el interés nacional, fundamento de la política exterior, es planteado desde instancias donde despachan políticos que fueron elegidas por medios democráticos (elección popular), se puede decir que aquél es legal y legítimo. Sin embargo, otros estudiosos del fenómeno opinan que el interés nacional tiene un carácter marcadamente subjetivo, pues está determinado por un momento histórico favorable o desfavorable al grupo en el poder, quien es finalmente quien delinea la política exterior atendiendo a sus propios intereses. Para mayor profundización del tema consultar Ricardo Valero, “La política exterior de México: contexto y realidades” y Blanca Heredia “La relación entre política interna y política exterior: una definición conceptual” en Humberto Garza Elizondo *Fundamentos y Prioridades de la Política*, Ed. COLMEX, México, 1986, pp. 21-38 y 115-133.

convertido en un importante instrumento de la política fiscal: si se desea que los ingresos del gobierno se incrementen, se reducen las importaciones, a su vez, si se desea que los ingresos salgan a fin de evitar sobrevaluaciones de la moneda o altos niveles de inflación, se aumentan las importaciones. En segundo lugar, se conserva su papel de herramienta para equilibrar la balanza de pagos pero se coordina el derrame de divisas con la política monetaria. Y, si bien no toma en cuenta ni el tipo de empleos que genera ni el monto de las remuneraciones, se considera también a la política comercial externa como un instrumento para crear fuentes de empleo, ya sea en el país que organiza dicha política o en otro donde las condiciones del empleo sean más convenientes para el capital. Finalmente, se le reconoce como una variable a manejar por cuestiones *estratégicas*. La imposición de aranceles a ciertos países y la negación a aceptar ciertas mercancías en el mercado porque dañan la industria local son algunas de las maniobras que se pueden realizar para no perder márgenes de maniobra dentro del Estado y fuera de él.

Estos enunciados que han servido para formar teóricamente a las generaciones de estudiosos del comercio y para “entender” el comportamiento del comercio a lo largo del tiempo, como si las condiciones del comercio internacional fueran siempre las mismas, dejan a un lado consideraciones fundamentales relacionadas con el ejercicio del poder de las personas que gobiernan. Si bien es cierto que la política comercial externa representa para las grandes potencias una posibilidad para hacerse de ganancias en el intercambio comercial y contribuye a la estabilidad monetaria, no lo es menos que no deja de ser parte de la política exterior, a la que se subordina. Así, si ésta apunta a satisfacer la necesidad interna de las élites político-empresariales de la Unión Americana de mantener su hegemonía en la región y la necesidad del capitalismo norteamericano de hacer frente a una situación de vulnerabilidad estratégica que lo deja en desventaja en la crisis de sucesión hegemónica actual y que sólo mejoraría satisfaciendo sus intereses geopolíticos y geoeconómicos, no será única y principalmente la corrección en la balanza comercial deficitaria estadounidense el principal objetivo que oriente su actuar comercial hacia el exterior.⁸

Dadas las evidentes debilidades en el plano estratégico, la política comercial externa de los Estados Unidos ha venido sufriendo importantes transformaciones desde la crítica década de los setenta. A decir de los estudiosos del tema⁹, este país ha pasado del multilateralismo clásico al bilateralismo propio de épocas de exacerbación de la competencia intercapitalista, cuando resulta más conveniente el intercambio comercial con los países más cercanos geográficamente o con las naciones cuyos productos sean más estratégicos o cuyo mercado sea más amplio. No resultó fortuito que las rondas del GATT comenzaran a estancarse justo cuando su principal patrocinador empezaba a perder hegemonía en la economía internacional ni que ante el resurgimiento económico europeo y asiático empezaran a fortalecerse las regiones y las zonas de libre comercio que empezaban a conformar. La política comercial externa de los Estados necesitaba ajustes para reorientar su lugar de potencia hegemónica en el mundo en general y en el hemisferio occidental en particular, pues es justo este territorio el área natural de influencia a decir de los planteamientos geopolíticos del gobierno norteamericano.

Así, aunque en la actualidad el discurso gubernamental tanto de los países latinoamericanos como de los Estados Unidos hable de los acuerdos de libre comercio como convenios en materia puramente comercial y/o económica, lo cierto es que el comercio entre los países es un instrumento político básico para la proyección de los intereses nacionales en el exterior, que las negociaciones comerciales entre dos

⁸ Para tener una idea de la maraña de intereses que intervienen en la elaboración de la política comercial externa estadounidense, hay que echar un vistazo a las instituciones que la configuran: a) La Oficina del Representante Comercial Estados Unidos; b) el Departamento de Agricultura; c) el Departamento de Comercio, del cual dependen la Administración de Comercio Internacional, los Servicios Comerciales Externos, la Unidad de Política Internacional, la Unidad de Desarrollo del Comercio, la Administración de las Importaciones y el Buró de la Administración de las exportaciones; d) el **Departamento de Defensa**; e) el Departamento del Trabajo; f) el **Departamento de Estado**; g) la Comisión Legislativa de Comercio Internacional; h) el Banco de Importaciones y Exportaciones; i) la Agencia de Cooperación para el Desarrollo Internacional. Para mayores referencias ver www.whitehouse.gov.

⁹ La principal de ellos y cuyo trabajo se toma como base para esta afirmación es María Cristina Rosas estudiosa de la política comercial externa estadounidense. Sobre el tema léase María Cristina Rosas, Crisis del multilateralismo clásico: política comercial externa estadounidense y zonas de libre comercio, Ed. IIE/FCPyS/UNAM, México, 1995, 287 pp.

o más países se resuelven de acuerdo a los intereses del grupo que este momento detenta el poder en el país más fuerte —Estados Unidos, en este caso— y que los más recientes acuerdos de libre comercio van más allá de meros convenios de intercambio de bienes y servicios y se convierten en estrategias claramente dirigidas a recuperar y fortalecer la hegemonía estadounidense en la región, la cual pasa obligatoriamente por el control de territorios y de recursos naturales estratégicos. Robert Zoellic, representante comercial de los Estados Unidos en el exterior lo expresó bien: “los países que buscan acuerdos de libre comercio con Estados Unidos deben pasar una inspección en más que criterios de economía y comercio para ser elegibles. Como mínimo, dichos países deben cooperar con los Estados Unidos en sus objetivos de política exterior y seguridad nacional, como parte de los criterios con los que se guiarán para seleccionar a los potenciales socios de tratados de libre comercio”. (Visca, 2004)

La política comercial externa de los Estados Unidos de las dos últimas décadas, herramienta básica de su política exterior, no se circunscribe al ámbito de lo comercial y mucho menos ha sido planteada y ejecutada para satisfacer necesidades internas de la población de la propia Unión Americana como la creación de empleos y la reducción del enorme déficit presupuestal que hasta ahora sólo se ha compensado con los flujos de capital financiero, pues después de quince años de acuerdos comerciales bilaterales ni la balanza comercial ha llegado a ser positiva ni se han creado mejores empleos para los norteamericanos. La política comercial ha sido pensada en los términos de los grupos gobernantes y de los intereses económicos que representan, por lo que la promoción del libre comercio fuera de sus fronteras está directamente relacionada con su pérdida de poder mundial y con la necesidad de reposicionarse en el esquema capitalista global, empezando por redefinir las relaciones políticas con América Latina, el área natural de influencia de la política exterior estadounidense desde la evocación de la célebre Doctrina Monroe en los primeros años del siglo XIX.

Tras la implantación de los PAE en América Latina, esta región se convirtió en una importante exportadora de capitales¹⁰ y los Estados Unidos, a su vez, se convirtieron en el mayor inversionista en nuestros países. Esta situación, en el contexto de la competencia intercapitalista y del reconocimiento de la deplorable economía norteamericana en relación con otras economías, hizo que este país revalorara su política de seguridad y que colocara a América Latina no sólo como abastecedora segura y barata de recursos naturales —que era el papel que había venido jugando hasta ahora— sino como una porción geográfica segura ante la exigencia de mercados más amplios para su producción, de reservas tributarias seguras y de fuerza de trabajo barata. América Latina se convertía así en una región económicamente importante como mercado para inversiones y exportaciones de los Estados Unidos, como suministrador de materias primas y como socio industrial y hasta financiero.

Dado lo conveniente y favorable que resultaba una América Latina endeudada y gobernada por personas afines a la ideología neoliberal, el gobierno de los Estados Unidos empezó a articular un esquema de exclusividad comercial y de inversiones con el fin de acabar de institucionalizar y “norteamericanizar” los vínculos comerciales y financieros que tenía con esa región. En este escenario, George Bush padre lanza la Iniciativa para las Américas el 27 de junio de 1990. En este documento se contemplaban tres puntos esenciales: el comercio, el flujo de inversiones y la deuda externa. Además, se hacía manifiesta la intención de crear una zona de libre comercio que se extendiera “desde el puerto de Anchorage, en Alaska, hasta la Tierra del Fuego”.

Esta Iniciativa para las Américas, que quería conformar una zona hemisférica de Libre Comercio y fomentar la inversión extranjera, hacía explícita una decisión que el gobierno norteamericano había tomado pocos años antes, ante las transformaciones económicas y políticas mundiales: se acababa la asistencia financiera a la región. Esta decisión no se tomó porque, de manera súbita, el gobierno estadounidense descubrió que la prosperidad en el hemisferio vendría del comercio y no de la asistencia.

¹⁰ Según un estudio de John Saxe, en el periodo comprendido entre 1976 y 1997, América latina exportó a otras regiones un total de 2 billones 51 mil 619.1 millones de dólares por concepto de transferencia de excedentes, cifra que se desglosa con el pago del servicio de la deuda, pérdidas por intercambios, fuga de capitales, utilidades netas y errores y omisiones. (Saxe y Petras, 2001: 111).

Lo que sucedió fue que la economía de ese país necesitaba ampliar sus mercados ante sus bajos niveles de productividad. Además, ya no tenía suficientes recursos como para seguir aportando ayuda de la misma forma en que lo hacía antes, cuando el peligro del “comunismo” estaba latente. Sin este pretexto, el Congreso ya no autorizaba la ayuda económica tan fácilmente. Este cambio de parecer marcó un hito para la región: desaparecía el concepto de asistencia al desarrollo y su lugar lo venía a llenar uno más acorde a la ideología imperante: inversión directa o indirecta.

La iniciativa de Bush iba entonces encaminada a cumplir dos objetivos fundamentales. Primero, reforzar los PAE en América Latina y hacer de esa porción del hemisferio un socio todavía más compatible con sus intereses, prometiendo ya no el desarrollo sino un crecimiento económico sostenido que aliviaría los problemas de migración y narcotráfico. Así, al amparo de la Iniciativa se destinaron créditos para financiar la deuda externa de Bolivia, Perú y Colombia, lugares donde el cultivo de enervantes se hacía presente con mayor fuerza. Segundo, asegurar a largo plazo mercados donde colocar productos e inversiones, enfrentar mejor la competencia intercapitalista y recuperar parte de su hegemonía perdida.

Este intento de crear un medio favorable para que las corporaciones estadounidenses apuntaladas con dinero público por el Estado pudieran contrarrestar la influencia de la formación de otros bloques —el europeo y el del sudeste asiático—, tenía a su favor la dominación de la gran potencia sobre un continente ya ocupado por el capital transnacional, ocupación y dominación que pronto se expresó en el predominio del capital de las empresas de los Estados Unidos en distintas ramas de la producción —sobre todo en las estratégicas— así como sobre la moneda, el comercio y las finanzas. Bajo estos supuestos, México¹¹ se convirtió en la plataforma de lanzamiento de un plan que al mismo tiempo que acentuaba la hegemonía norteamericana en la región, proyectaba su poder hacia un mundo donde ni Europa, ni China ni Japón cedían a cuadrarse a los designios estadounidenses.

Si bien los supuestos sobre los que se pretendía integrar al continente bajo la égida de los Estados Unidos iban de acuerdo al momento histórico por el que atravesaba este país, la idea de unir al continente no era nada novedosa. En diversos momentos de su historia los Estados Unidos han expresado en términos geográficos las necesidades materiales exigidas por su evolución hacia gran potencia y por el auge del capitalismo. Este impulso para establecer una zona de exclusividad comercial y de inversiones desde la cual proyectar su poder militar ha sido un deseo invariable del planteamiento geopolítico a lo largo del tiempo.

La Iniciativa de las Américas de Bush se inscribe así dentro del proyecto panamericano, una continuidad más dentro de la política exterior estadounidense. La Primera Conferencia Internacional Americana realizada en 1889 es el antecedente más lejano de la actual estrategia librecambista e integracionista de los Estados Unidos en nuestro continente, pues ahí se oficializaron las tesis del panamericanismo apoyado en la Doctrina Monroe, que contrariaba los ideales del bolivarianismo.¹² Los tiempos en que se convocó dicha conferencia coinciden con un momento en que se efectúa una reversión en los términos del intercambio mundial. A decir de Salvador Morales,

¹¹ Aunque México fue el primer país latinoamericano que entabló un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, existe el antecedente del Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos–Canadá de 1988 que marcó la entrada al hemisferio de los procesos de regionalismo.

¹² En la historia del continente americano han existido dos proyectos de integración: el panamericano y el latinoamericano. El primero, basado en los ideales del monroísmo y del Destino Manifiesto y el segundo, apoyado en los ideales de Simón Bolívar entre otros pensadores latinoamericanos como José Martí. Dados sus orígenes, ambos plantean la integración de forma muy distinta. El **panamericanismo** propone una unión de las naciones latinoamericanas con los Estados Unidos y el predominio de una nación sobre las otras desde una perspectiva hegemónica. Se materializa con la conformación de la OEA, donde los Estados Unidos asumen la responsabilidad de la defensa del continente definiendo como enemigo a todo el que contravenga sus intereses. El panamericanismo se extiende en el sentido militar y se incorpora al léxico de la unión el concepto de “seguridad hemisférica”. El **Bolivarianismo**, en cambio, plantea una unión entre países latinoamericanos con el predominio de la igualdad, desde una perspectiva internacionalista y teniendo como base la ideología bolivariana. Se intentó materializar por primera vez en el Congreso de Panamá de 1824, pero no tuvo los resultados esperados.

“Frente a la balanza de pagos desfavorable y deplorable y el desangramiento de las reservas áureas, el imperativo canalizado por Bleine¹³ e “inconfiable al juego del liberalismo espontáneo” era el intercambio controlado por Estados Unidos. *No hay dudas... que se imponen imperativos geopolíticos cuando se decreta que el supremo interés de los negocios constituye el “nuevo interés hemisférico” y se decreta la asesoría natural de Estados Unidos en función de su riqueza, su experiencia empresarial, su poderío militar, su presencia internacional y su estabilidad política.* (1994: 71. El subrayado es mío)

No quedan dudas tampoco de que el capitalismo norteamericano siempre ha necesitado de la presencia del Estado para el buen funcionamiento del sistema y que este Estado siempre contempla una salida externa en las mejores condiciones a las contradicciones en el nivel interno.

Siguiendo las pautas marcadas por Bush de ajustarse a los planteamientos geopolíticos y empresariales y aún en contra de varios grupos de electores demócratas, en 1994 William Clinton convocó a la primera reunión hemisférica desde 1967, a los 33 jefes de Estado *elegidos democráticamente* —Fidel Castro no fue invitado— con el objetivo de discutir problemas que atañían a todo el continente. Así, se llevó a cabo la I Cumbre de las Américas en Miami del 9 al 11 de diciembre. Aquí, los Estados Unidos realizaron la presentación formal de un acuerdo de libre comercio que abarcaba todo el continente, al que se denominaría Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA). Este acuerdo era planteado por la potencia del norte como una especie de premio a los países latinoamericanos por haber seguido a pie juntillas los PAE para la región, mediante los cuales se había conseguido un incremento en el intercambio comercial.

En esta primera cumbre, previa a la primera crisis que puso en jaque la economía mexicana y las de la región, se concretó la Iniciativa para las Américas de Bush: los 34 presidentes acordaron crear en todo el continente una zona de libre comercio. Se fijó un plazo de 10 años que se cumpliría en el 2005 para terminar las negociaciones comerciales. Así, el hemisferio se convertiría en el mercado más grande del mundo: 850 millones de consumidores y 13 mil millones de productos y servicios. (Gaete, 2001: 726). Además, se formó además un comité Tripartito para acelerar las negociaciones, conformado por la OEA, el BID y la CEPAL y se acordaron una serie de reuniones ministeriales para discutir a fondo los aspectos que entrarían en el acuerdo.

Poco antes de la realización de la segunda cumbre, en 1997 durante la tercera reunión ministerial, se pone de manifiesto que Brasil no está dispuesto a acatar el ALCA sin negociarlo. Propone que este acuerdo coexista con tratados bilaterales y subregionales (llámese Mercosur) y que los países pudieran negociar o adherirse al ALCA individualmente o como miembros de un grupo de integración subregional. En 1998 se realiza la II Cumbre de las Américas en Santiago de Chile y en ella las divergencias entre los Estados Unidos y Brasil sobre la forma de construir el ALCA alcanzaron su punto máximo, pues Brasil aboga por la consideración de los intereses nacionales y regionales y las cuestiones sociales en un momento especialmente difícil para las economías sudamericanas por la crisis brasileña y la argentina. William Clinton llegó a esta reunión sin el *fast track*¹⁴ del Congreso para acelerar la negociación del acuerdo —de hecho no lo consiguió en los 6 años que promovió el proyecto— y eso dificultó aún más las cosas. Sin embargo, el panorama se oscureció aún más cuando en agosto de 2000, Henrique Cardoso, presidente de Brasil, convoca a una reunión cumbre de Jefes de Estados Sudamericanos con el fin de conversar acerca de problemáticas comunes¹⁵.

Desde la Iniciativa para las Américas presentada por Bush en 1990 hasta la llegada al poder de George Bush hijo, en 2001, se celebraron en torno al ALCA, dos cumbres hemisféricas, 6 reuniones de ministros de comercio y muchas más de grupos de trabajo y de acercamiento entre empresarios, grupos

¹³ James Bleine fue un político del estado de Maine que reelaboró las doctrinas de Jefferson, Adams y Monroe para adaptarlas al proceso de expansión imperialista de los Estados Unidos que convocó a la Conferencia de 1889 con el fin de hallar mercados a la cuantiosa producción a la que el mercado interno no podía dar ya cabida.

¹⁴ Procedimiento que permite al ejecutivo de Estados Unidos negociar acuerdos comerciales con otras naciones y presentarlos al congreso para su aceptación o rechazo y sin modificaciones al acuerdo original.

¹⁵ Se dice que en realidad Cardoso llamó a esta reunión en el marco del apoyo económico norteamericano al Plan Colombia, como una forma de hacer contrapeso a la influencia militar que los Estados Unidos empezaban a tener ahí.

civiles organizados y otros actores sociales que por un lado, no parecen adelantar demasiado, pero por el otro, demuestran que el proyecto sigue adelante.

En abril de 2001 se realizó en Quebec la III Cumbre de las Américas, que es especialmente importante por los acuerdos que se tomaron, que no estaban precisamente relacionados con el libre comercio. Se acordó incluir en el ALCA una cláusula propuesta por Canadá para garantizar la democracia representativa por la cual quedarían excluidas del acuerdo las naciones no democráticas.¹⁶ Con relación a esta disposición, Cristina Rosas advertía que la cláusula democrática no funcionaría de forma simétrica ya que las débiles economías de América Latina no podrían exigirle a los Estados Unidos y a Canadá mayor democracia cuando tienen prácticas electorales dudosas, llaman a elecciones antes de tiempo y/o no respetan los derechos de los migrantes y las minorías étnicas. (Gazcón, 2001:14)

En esta cumbre también se renovó el compromiso de combatir la producción y el tráfico de drogas y el crimen organizado. Se acordó acabar con la certificación y sustituirla por un mecanismo multilateral en la OEA, el MEM (Mecanismo de Evaluación Multilateral) con el que se evaluaría conjunta y objetivamente el problema. Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia pidieron que se renovaran las preferencias comerciales de las que ya gozan por su cooperación en la lucha antidrogas. Asimismo, se recalcó el compromiso de que las negociaciones terminen a más tardar en enero de 2005 para que el acuerdo entre en vigencia en diciembre de ese año; se rechazó la idea de crear una moneda única o conformar instituciones políticas tipo Parlamento Europeo, decidiendo una vez que podemos ser consumidores pero no ciudadanos; y se anunció que la integración de un proyecto regional de energía que comprende ahora sólo a los miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se piensa extender a todo el hemisferio. Dentro de lo extraoficial, la prensa mencionó que en las conclusiones de la cumbre se incluiría un capítulo que le daba a las transnacionales el derecho a colocarse por encima de los gobiernos nacionales.

Sin embargo no todo fue tan favorable para los Estados Unidos. Al igual que Clinton, Bush llegó sin el fast track para la negociación del acuerdo¹⁷. Los sindicatos y los ambientalistas estadounidenses han exigido a sus representantes que no se firme ningún acuerdo sin negociar antes sobre los temas que les conciernen. Además, en la Cumbre de Quebec, Brasil no garantizó el respaldo al ALCA y lo condicionó a una serie de concesiones comerciales. A diferencia de México, Colombia y otros países de la región, las naciones del Mercosur, entre las que se incluye Brasil, no dependen tanto del comercio norteamericano. Además, Brasil está promoviendo una zona de libre comercio sudamericana que una al Mercosur con los países del Pacto Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). La postura de Brasil no significa que no quiera negociar pero sí que quiere hacerlo en condiciones favorables, aunque esto parece muy difícil cuando el PNB de los Estados Unidos alcanza casi lo 11 billones de dólares y su economía equivale a 65% de lo que produce el continente. (CIA, 2005) Así, no puede haber principio de reciprocidad que concilie intereses de participantes tan desiguales.

Aparte de la oposición de Brasil a sus designios imperiales, el ALCA del gobierno norteamericano se topó con el rechazo de varias agrupaciones que organizaron la Cumbre del Pueblo de forma paralela al ALCA. Bajo el lema de “No al ALCA; otra América es posible” maestros, estudiantes, ecologistas, sindicatos, artistas, mujeres, indígenas, etc. hicieron un llamado a buscar alternativas con un trasfondo más social y humano. La Cumbre de Quebec, a la que se le llamó “la cumbre amurallada” por la valla de

¹⁶ Recuérdense los problemas ocasionados en la elección del Perú, cuando los Estados Unidos se querían deshacer de Fujimori, que ya no convenía a sus intereses; los dolores de cabeza del imperio por las bravatas de Chávez y el caso de Cuba. El 6 de septiembre de 2001, de acuerdo con lo discutido en la III Cumbre, el consejo permanente de la OEA aprobó por unanimidad el borrador de la Carta Democrática que considera la suspensión de cualquier país miembro donde haya una ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático. Se aprobó hasta ese mes porque en el mes de junio del mismo año Venezuela se había opuesto. La firma del acuerdo de la cláusula democrática se opacó por los avionazos del 11 de septiembre.

¹⁷ Hasta antes de los acontecimientos del 11 de septiembre, el ALCA parecía ser la mayor prioridad de la política exterior norteamericana. Ahora, la próxima oportunidad de Bush para obtener el fast track será en el 2003, porque en este 2002 habrá elecciones.

4 metros de altura y 4 km de extensión que protegía a los mandatarios, se convirtió así en la primera reunión de alto nivel sobre el ALCA, donde las protestas al proyecto de libre comercio fueron tan importante como la reunión misma.

Más allá de las cumbres para hablar sobre el ALCA, nos podemos dar cuenta de su carácter expansionista que va de acuerdo a las necesidades estadounidenses de ofrecer acuerdos comerciales preferenciales a los países de América Latina para mantenerlos atados económica, financiera y políticamente. El ALCA ofrece a los Estados Unidos la transformación total de la geografía del continente en detrimento de los intereses de los pobladores de la región latinoamericana. Algunos estudiosos como John Saxe manejan incluso que tras el planteamiento del ALCA subyace una especie de neomonroísmo, aunque más bien se trata de una expresión de monroísmo puro, sin el *neo*, porque en realidad desde que se proclamó la Doctrina Monroe, los Estados Unidos nunca han tenido la intención de dejar el control del continente.

El ALCA se inscribe así dentro del plan de los Estados Unidos para recuperar el espacio perdido a manos de otras potencias capitalistas a costa de su economía interna, pues el libre comercio propuesto ni siquiera beneficia a su propia población, como lo demuestra la ausencia de apoyo popular al proyecto. Sin embargo, más que asombrarse por la forma en que el Estado norteamericano promueve los intereses del capital transnacional, lo que más sorprende de esta situación es la disposición de casi todos los regímenes políticos latinoamericanos para establecer vínculos tan estrechos con el gobierno norteamericano y la afinidad de las metas entre el gobierno de la potencia hegemónica en la región y los gobiernos latinoamericanos, que parecen ignorar que con el establecimiento del ALCA la dinámica económica de América Latina quedaría sujeta a las estrategias de las corporaciones transnacionales y que en este momento de vulnerabilidad estratégica, los Estados Unidos están utilizando al libre comercio como un instrumento intervencionista.

El libre comercio —que en realidad ni es tan libre porque los Estados Unidos subsidian a las empresas con fondos públicos y protegen a varias industrias cobrando altos aranceles— va mucho más allá de lo económico. En realidad, América Latina, a excepción de México, es un mercado secundario pues representa sólo el 1% del comercio con ese país. (ILDIS, 2003) Esto lleva a pensar que bajo el establecimiento del ALCA hay otro tipo de intenciones de corte geopolítico y geoestratégico. Para nadie es un secreto que tras el fin de la guerra fría los problemas comerciales entre las grandes potencias capitalistas se trasladaron a las esferas políticas y de seguridad: lo económico se trasladó a lo militar. Las evidencias materiales indican que para competir con otras potencias, los gobiernos de la Unión Americana se han inclinado a favor del uso de una combinación de instrumentos comerciales y financieros subsumidos a los fines de la seguridad nacional.

Desde 1994, el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, William Perry y otros militares y funcionarios civiles como Richard Cheney, han insistido en la necesidad de complementar los tratados de libre comercio con una integración militar para América del Norte y el hemisferio occidental. Todo apunta, pues, a que Washington ha decidido usar una combinación de instrumentos comerciales y financieros y militares para no perder su hegemonía en el continente, para hacerse más fácilmente de recursos naturales estratégicos y para proyectar su poder hacia todo el globo. Así, aunque propiamente el documento que institucionaliza el ALCA aún no ha sido acabado y se sigue discutiendo, lo cierto es que en la realidad los mecanismos necesarios para la implantación del acuerdo —legislaciones flexibles, privatización de sectores estratégicos, políticas económicas tanto fiscales como comerciales afines, construcción y acondicionamiento de la infraestructura existente en la región, entre otros— *ya han sido establecidos y se encuentran funcionando*.

c) El papel de las corporaciones transnacionales en el libre comercio

En las últimas décadas, las corporaciones transnacionales se han vuelto el centro de múltiples estudios ya que han tenido un papel vital en la internacionalización del capital, en el proceso de extensión e intensificación de las relaciones de producción capitalistas en todo el mundo en el cual se inscribe el

libre comercio. Esto no significa que carecieran de importancia en el pasado pero sí que tras la expansión del capitalismo hacia Europa Central y la ex URSS, los mercados de las transnacionales se han ampliado y se ha agudizado la competencia intercapitalista, en la que han sobresalido los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Ante este panorama, el paradigma dominante de la globalización ha dado tal importancia a la gestión de las empresas en el mundo y ha subrayado tanto su eficiencia en contraste con la corrupción e ineptitud del Estado, que ha hecho creer que la actividad de las primeras está desligada e incluso se contraponen a la acción del segundo. Pero, como se podrá apreciar, esto no es así.

Si bien es cierto que las corporaciones transnacionales se han convertido en el principal agente de despliegue económico de las naciones y concentran buena parte de la actividad económica tanto en el comercio y finanzas como en la inversión foránea, no lo es menos que estas transnacionales se concentran geográficamente en las zonas de mayor desarrollo económico, lo que ha conducido a que las relaciones económicas internacionales estén bajo el control de un reducido número de grupos empresariales y financieros. Este hecho desmiente una de las quimeras de la globalización pop¹⁸ que afirma que cualquier economía puede “insertarse” gracias al acceso a medios de comunicación baratos y eficaces y a un variado espectro de nuevas tecnologías. Como afirma Jorge Beinstein

“(…) visto desde una perspectiva mundial lo que se detecta es un doble movimiento (gradual en el centro, exacerbado en la periferia) de polarización del poder económico y de mutación de sus élites hacia los negocios financieros que definen la cultura de las estrategias empresariales”. (*Op. Cit.*: 35)

Este conjunto de empresas globales maneja casi toda la estructura productiva de tecnología de punta, ha conseguido adueñarse de la mejor parte de las que fueron empresas públicas en los países no desarrollados, dirige el comercio y las comunicaciones y ha convertido a la especulación financiera en el centro de su dinámica de negocios. De las 100 economías más grandes en el mundo, 51 son corporaciones y sólo 49 son países (O’ Tuathail, *Op. Cit.*: 306). Según cifras del Banco Mundial y Fortune, 35 000 empresas globales participan con 65% del Producto Bruto Mundial (PBM); las primeras 500 empresas globales participan con el 42% del PBM y las primeras 50 empresas globales, participan con el 25% del PBM. (Beinstein, *Op. Cit.*: 36)

El accionar de estas corporaciones transnacionales, cuyas oficinas centrales se asientan en el territorio de los países desarrollados¹⁹, se ha expandido en dos sentidos: primero, en el de las ganancias. La apertura de fronteras obligada por el ajuste estructural del FMI en detrimento de la mediana y pequeña empresa de los países no desarrollados²⁰ y la capacidad monetaria para el desarrollo de alta tecnología han elevado considerablemente el margen de ganancias de las corporaciones transnacionales. A este respecto cabe agregar que el desarrollo tecnológico ha permitido un intercambio más grande y más rápido de capital financiero en todo el mundo beneficiando a un muy reducido grupo de accionistas y especuladores cuya nación de origen es la mayoría de las veces, uno de los países del G-7.²¹ En segundo lugar, en el del espacio, pues la ampliación de los mercados permitió su mayor y mejor colocación en territorios que durante la guerra fría no pudieron ser completamente penetrados.

¹⁸ En el artículo “Globalización e imperialismo”, John Saxe denomina de esta forma al discurso globalista que se ha instalado como una oferta de moda eufórica y determinista, acrítica y superficialmente aceptada por grandes públicos empresariales, políticos y académicos. Véase John Saxe-Fernández coord., *Globalización: crítica a un paradigma*, Ed. UNAM-IIIE-DGAPA-Plaza y Janés, México, 1999, 365 pp.

¹⁹ Según Atilio Borón, 96% de las 200 transnacionales más grandes del mundo, tienen sus casas matrices en ocho países, están legalmente inscritas en los registros de sociedades anónimas de ocho países y sus directorios tienen sede en ocho países del capitalismo metropolitano. Menos del 2% de los miembros de sus directorios son extranjeros mientras que más de 85% de todos los desarrollos tecnológicos de las firmas se originan dentro de sus “fronteras nacionales”. (2002: 47)

²⁰ La descapitalización de las economías de los países menos desarrollados ha servido para financiar el desarrollo económico e industrial de los países más ricos. Esta desnacionalización de la industria local afecta de manera significativa en las economías nacionales, que son incapaces de sobrevivir en mercados acaparados por las grandes empresas.

²¹ Ese enorme flujo de capitales que transitan con tanta rapidez de un país a otro no se puede explicar sin la SOBRECUMULACIÓN, la existencia de capitales excedentarios en busca de condiciones de generación de ganancias extraordinarias en territorios ajenos al suyo. Véase Raúl Ornelas, “Las empresas transnacionales como agentes de la dominación mundial capitalista” en Ceceña, Ana Esther, et. alli., *Producción estratégica y hegemonía mundial*, p. 400.

Se les llama transnacionales²² porque sus distintas ramas productivas se han transnacionalizado tanto en la obtención de recursos para la producción como en la venta de sus productos elaborados, dando lugar a la existencia de grandes redes transnacionales distribuidas en varias partes del mundo, en dinámica circulación de recursos y productos. Como afirman Andrew Glyn y Bob Sutcliffe, las corporaciones son más globales ahora en cuanto a la ubicación de sus activos o sus mercados, o en cuanto al personal y a la gestión, hallándose de esta manera menos enraizada en algún Estado Nacional; (además) dichas corporaciones, aplican una división más global del trabajo al colocar distintas partes de sus procesos manufactureros en diferentes países. (1999:106).

Sin embargo, no es la acción de todas las corporaciones transnacionales las que interesan a este trabajo sino sólo aquellas que operan en las actividades estratégicas de los Estados Unidos y cuyas actividades son vitales para el despliegue de la política exterior de esta gran potencia. Para esclarecer el papel de las transnacionales en el mercado mundial y en la producción estratégica particularmente, se acude a dos niveles de análisis. El primero se refiere a la organización de las transnacionales en las actividades estratégicas como la base de las estrategias competitivas; el segundo se centra en la relación entre los Estados y las corporaciones transnacionales en tanto factor vital para entender el problema de la importancia de ciertos territorios que sirven como base de origen a los capitales transnacionales.

Las empresas muestran una diversidad de estrategias en función de su necesidad de consolidación y expansión fuera de la demarcación territorial de su estado madre. Además, la lógica de acción de las corporaciones es el control de las bases del liderazgo económico internacional y por ello su acción se ha venido focalizando en la producción estratégica, sobre todo tras la agudización de la competencia intercapitalista. En cuestiones de tecnología, las transnacionales han modificado la organización del trabajo al introducir la tecnología de punta en el proceso productivo y al incentivar la investigación en este rubro, por lo que se han flexibilizado las condiciones de la fuerza de trabajo, rompiendo el compromiso que las obligaba a otorgar ciertos beneficios sociales.

En cuanto a cuestiones espaciales podemos hablar de la deslocalización de la producción, que busca, primero, menores costos de mano de obra y de recursos naturales y segundo, nuevos espacios para el proceso productivo. Para ello, las corporaciones transnacionales buscan hacerse del control de los recursos naturales estratégicos y de mercados abiertos donde la regulación estatal contemple el libre comercio, como los países latinoamericanos; la desregulación de actividades prohibidas a la acción del capital extranjero o la exención de impuestos a sus labores; y el libre movimiento de los capitales invertidos que permita el traslado de las ganancias del país receptor al país matriz.

Pero el poder de las empresas transnacionales estratégicas y el éxito de sus estrategias en el mundo no se puede entender sin el estudio de las relaciones que mantienen con sus Estados de origen. Aunque algunas tesis afirmen que los intereses de las corporaciones transnacionales se separan del Estado porque la maximización de las ganancias les lleva a actuar en otros países y así ya no crean empleos en los propios y que los Estados no guían más el proceso económico como actores no-estatales internacionales (Ornelas, 1995: 404 y 478), las corporaciones transnacionales tienen limitaciones: no pueden utilizar ni el

²² No es la intención de este trabajo entrar en el debate entre las diferencias implícita al denominarlas corporaciones *multinacionales* o corporaciones *transnacionales*. Algunos argumentan que la característica de multinacional o transnacional se otorga con base en el funcionamiento de la corporación en el mundo o de acuerdo a la conformación jurídica de la empresa, pues si tienen capital de distintas naciones y funciona en diversas partes del mundo es multinacional mientras que si el capital es de una sola nacionalidad se le denominará transnacional aunque también actúe fuera de las fronteras del país donde se originó. Sin embargo, las investigaciones han mostrado que las corporaciones actuales no son ni homogéneas en funciones ni inmutables en sus características a lo largo del tiempo, lo que dificulta su clasificación. Por ello se ha optado por denominarlas transnacionales en tanto que sus acciones van más allá del campo estatal pero la organización de sus actividades se planea en los países desarrollados, mientras que lo multinacional de la idea de una operación empresarial desde múltiples países, que puede incluir tanto a los desarrollados como a los no desarrollados. Para este trabajo se entenderá a la corporación transnacional como la unidad económico-financiera más refinada dentro del capitalismo dados su gran capacidad de acumulación y control de una gran cantidad de recursos financieros, tecnológicos, naturales y humanos, además de su dinamismo en términos de expansión territorial, que le permiten ser un vehículo estatal ideal para la promoción de objetivos de política exterior.

recurso de la violencia ni el del derecho internacional como instrumentos de defensa de sus intereses. Las corporaciones transnacionales necesitan de sus Estados porque dondequiera que se asienten, sus acciones en territorios distintos a los de su origen tienen repercusiones políticas.

La considerable participación de las transnacionales en la economía mundial y la importancia que han adquirido en las relaciones internacionales, pueden llevar a creer que su actuación es autónoma y que sus intereses están alejados de los intereses del grupo en el poder, conformado por representantes *populares* electos por medios *democráticos*. Sobre todo, el discurso de la globalización intenta convencer de que el Estado debe alejarse del proceso productivo y dejar que las fuerzas del mercado actúen de forma libre. Sin embargo, la creación de un libre mercado, es, primero que todo, una opción política, pues, como afirma John Gray, “la construcción de un libre mercado es un proyecto de ingeniería social” (*Op. Cit.:* 26).

Ese discurso de la globalización que se ha materializado en la aplicación de las llamadas políticas *neoliberales* en todo el mundo ha construido la idea de la formación de un mercado mundial de bienes y servicios al que las fronteras y regulaciones nacionales le impiden su libre desarrollo. De esta forma, las corporaciones transnacionales aparecen como entes autónomos de unas relaciones económicas internacionales que se autorregulan sin la necesidad de la intervención estatal²³. Se dice que a medida que los poderes de los Estados soberanos se desvanecen, los de las transnacionales crecen, pero a pesar de todo lo afirmado, las estructuras nacionales desde las que operan las transnacionales más poderosas, permanecen.

El capital de las transnacionales no es un capital sin raíces que opere de manera ajena a la regulación del Estado Nacional y tampoco se puede dar como hecho que sus actividades comerciales y el desarrollo de la tecnología se hayan globalizado de alguna manera. La mayoría del comercio que se lleva a cabo es intrafirma y/o dentro del Estado de origen y su región inmediata. Sólo alrededor de 40 grandes empresas en el mundo generan al menos la mitad de sus beneficios en el extranjero, mientras que menos de veinte mantienen al menos la mitad de sus instalaciones productivas en el extranjero (*Ibid:* 93). Según Saxe-Fernández, el 70% de las corporaciones transnacionales son *home based*: se mantienen fuertemente encajadas en su medio nacional (1999:32), lo que significa que no están fuera de la órbita de la regulación estatal. Esto da como resultado que el poder del Estado sea un elemento de gran peso para el éxito o fracaso de las empresas que buscan invertir o vender internacionalmente.

Es un hecho que sin fundamentos políticos los mercados se pueden colapsar. Por ello, ahora menos que nunca, las interacciones entre la corporación transnacional y el Estado norteamericano desde el cual opera forman parte de su óptimo funcionamiento. A diferencia de lo que opinan los teóricos del actual orden, el Estado norteamericano es más que un árbitro, pues entre sus funciones principales se encuentra la administración de los recursos naturales vitales para la reproducción económica sin la cual el propio Estado podría desaparecer o podría dejar de ser gran potencia. De este modo, las corporaciones transnacionales están dentro de la gran estrategia estatal; por eso, el éxito de las transnacionales estratégicas en el control de ciertos nichos del mercado mundial es el éxito del Estado y de la clase política que lo conforma. Se financia así con dinero público el bienestar de los sectores privados.

En el actual contexto de inestabilidad política cuando ninguna gran potencia se puede considerar como líder de la sociedad internacional, la competencia económica se agudiza y los Estados Unidos han tendido a utilizar su fuerza militar y política y hasta sus aparatos de inteligencia desarrollados durante la guerra fría para sostener la internacionalización de las transnacionales, que sin subsidios estatales y el establecimiento de un mercado *ad hoc* a sus capacidades e intereses, no pueden sobrevivir.

²³ John Saxe-Fernández afirma que el paradigma globalista esconde la naturaleza explotativa y asimétrica del imperialismo en el que ocurre la internacionalización económica; además, da como hecho que la posición de un actor en el sistema interestatal está determinada por una dinámica derivada de una teorización del mercado, el cual tiende al equilibrio por medio de fuerzas automáticas o de autorregulación. Consúltese John Saxe Fernández, *Globalización e imperialismo* en Globalización: crítica a un paradigma, México, Plaza y Janés/UNAM, 1999, pp. 19 y 20.

La objetivación del dominio estadounidense en territorio latinoamericano, cuyos intereses geoeconómicos²⁴ y geopolíticos²⁵ convergen en la preparación de un área de libre comercio, no puede llevarse a cabo sin la acción de vehículos de expansionismo que parezcan alejados de la connotación militar, aunque ciertamente no lo estén. Si bien los ejércitos son los medios ideales para la ocupación espacial, existen formas más sutiles y menos costosas aunque no menos eficaces para tener el control de los recursos naturales estratégicos de los países latinoamericanos. Por eso, la acción de las corporaciones transnacionales resulta de vital importancia para la implantación del ALCA y la consecución de los objetivos hegemónicos estadounidenses. Es justamente su acción como vehículos ideales del establishment norteamericano para la consecución de los objetivos estratégicos de la política comercial externa, parte integrante de la política exterior norteamericana para América Latina, que la acción de las corporaciones transnacionales en América Latina no se puede desligar de la acción estatal como pretenden hacer ver los planes para el desarrollo de la región que los organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Fondo Monetario Internacional presentan a los gobiernos latinoamericanos.

Si, como afirma Samuel Kim, las grandes potencias son Estados fuertes “con la capacidad de movilizar los recursos humanos y materiales del país en la consecución de objetivos globales” (1997:

²⁴ El término *geoeconomía* ha sido utilizado desde hace varios años —sobre todo por los estudiosos de la *geopolítica* clásica— para referirse a los recursos naturales que poseen un valor considerable en el intercambio comercial internacional y para la industria nacional. La *geoeconomía* era considerada una especie de apéndice de la Geopolítica que se relacionaba de forma más directa con la Geografía Económica que con la propia Geopolítica. Sin embargo, al igual que la Geopolítica, la Geoeconomía puede ser retomada desde una perspectiva muy distinta a la del discurso justificador del gobierno de los Estados Unidos. Por ello, en este trabajo la connotación de la Geoeconomía será más parecida a la que se viene utilizando en los últimos tiempos en los círculos críticos del análisis de las relaciones internacionales, que si bien aceptan que ocurrieron cambios en la economía mundial, también entienden que estas transformaciones son parte de un proceso que se viene gestando desde hace siglos. La Geoeconomía deberá entenderse en el presente trabajo como ***una perspectiva de las relaciones internacionales cuyo análisis se centra en las acciones de política exterior de los gobiernos de las grandes potencias cuando en su búsqueda por la supremacía en la economía internacional se alían a actores no estatales (las corporaciones transnacionales) para proyectar y promover mejor sus intereses en el mundo.*** Cabe agregar que las corporaciones transnacionales en las que hace hincapié la Geoeconomía son las que orientan sus acciones hacia la obtención de productos geoestratégicos y al posterior desarrollo del aparato productivo estratégico que se enfoca a los sectores de la tecnología de punta y mantenimiento de la industria actual y al relacionado con la reproducción de la fuerza de trabajo. Así, las transnacionales que incumben a la Geoeconomía se inscriben dentro de ciertas actividades como son la extracción y refinación de petróleo y gas, la automotriz, la electrónica, la química, la farmacéutica, la de los alimentos y la aeroespacial.

²⁵ Aunque no es objeto de este trabajo discutir si la Geopolítica es una ciencia, una disciplina o un “arte”, como la llaman los militares; si pertenece al campo de la Geografía o de la Política; si su objeto de estudio se encuentra enmarcado dentro de las ciencias sociales o en las ciencias naturales, es importante aclarar a qué nos referimos cuando usamos esta palabra, ya sea como sustantivo o como adjetivo. La Geopolítica, es, por un lado, el conjunto de fenómenos de la realidad que se presentan en torno a la influencia de los elementos geográficos sobre las relaciones internacionales y de manera más específica, en los fenómenos que tienen lugar en el campo de la política internacional. Por otro lado, la geopolítica es la perspectiva científica que estudia estos fenómenos no solamente de acuerdo a la influencia de la geografía en la formulación de las políticas exteriores de los distintos Estados —las que se articulan en torno a los intereses de los distintos grupos en el poder y no en torno al interés general— y en el intento de esclarecimiento de las razones históricas por las cuales determinados Estados están interesados en la apropiación de ciertos recursos naturales y en el control de puntos específicos en el planeta, sino que intenta explicar de la manera más clara posible las características espaciales de la organización económica, política y social para facilitar la búsqueda de alternativas al orden espacial vigente. La Geopolítica no se puede reducir al campo de lo militar, como ha sido la constante hasta ahora. Es verdad que la inexistencia de un orden internacional incita a las grandes potencias a hacer prevalecer sus intereses mediante la fuerza, pero no es menos cierto que el fenómeno de la guerra y las armas en la actualidad tiene su esencia en la naturaleza conflictiva del capitalismo para reproducirse con la menor cantidad de obstáculos posible. Si se quiere hacer una profundización sobre la naturaleza y el origen de este concepto, así como su evolución a lo largo de los siglos, se pueden consultar varios libros tanto de los autores clásicos como de estudiosos sobre el tema como los siguientes: para el periodo de la geopolítica clásica, consúltese *Politische Geographie*, de Friedrich Ratzel, padre de la geopolítica que desarrolló el término *Lebensraum*; *The Influence of Seapower Upon the History*, de Alfred Mahan; y *The Geographical Pivot of History*, de Sir Halford Mckinder. Para mejor entender el periodo de la llamada “geopolítica del fascismo o contrafascismo”, léase a Karl Haushoffer e Isaiah Bowman. Para el periodo de la geopolítica de la guerra fría, revísese a George Kenan y Henry Kissinger. Finalmente, para estudiar la Geopolítica Crítica y la Nueva Geopolítica, léase a Ives Lacoste y Geroid O Thuatail.

246), Estados Unidos, como gran potencia, necesita movilizar estos recursos y lo hace mediante las empresas transnacionales, que una vez ubicadas en el país receptor, aprovechan la legislación comercial y financiera favorable para extraer mayores excedentes de capital y recursos naturales estratégicos. Para estos fines, el gobierno norteamericano mantiene una agencia que garantiza las inversiones en el extranjero. Se llama Overseas Private Investment Corporation (OPIC), la cual no sólo facilita créditos sino que apoya los reclamos de las corporaciones estadounidenses en territorio extranjero y obliga a los gobiernos a acatar las leyes estadounidenses en términos de inversiones.

Sin embargo, los cambios en los regímenes jurídicos de los países latinoamericanos obligados por los PAE no son suficientes para facilitar las actividades de las corporaciones transnacionales: resulta de capital importancia apuntalar las acciones de los agentes económico-financieros con la presencia de unidades militares que puedan proteger las inversiones y los recursos estratégicos en momentos álgidos. Para mejor entender este cruce de objetivos económicos y militares que el libre comercio impulsado desde Estados Unidos persigue para fortalecer su dominio en el hemisferio, se hace necesario explicar, primero, el control sobre los recursos estratégicos que poseen las corporaciones transnacionales en América Latina y, después, la relación entre los componentes meramente comerciales del ALCA y su correlato: la presencia militar.

II. EL PAPEL DE LAS CORPORACIONES TRANSNACIONALES EN LA APROPIACIÓN DE RECURSOS NATURALES ESTRATÉGICOS Y LA OCUPACIÓN DE TERRITORIOS GEOESTRATÉGICOS

Si bien es cierto que es necesario entender la acción de las corporaciones transnacionales de rubros estratégicos y sus vínculos con el sistema político estadounidense, resulta imperativo explicar la forma en que se apropian del espacio y sus recursos. Es necesario hacer énfasis en esto puesto que las relaciones de poder y fuerza son, ante todo, relaciones espaciales que no se gestan ex-nihilo. Así, la posesión de recursos básicos para la existencia y reproducción de la gran potencia capitalista del norte implica la ocupación *real* del territorio de una geoestratégica región, lo que significa la realización de proyectos que hagan efectivo el transporte y comercio de los bienes por tierra y agua, el desarrollo de la agroindustria, el estímulo de zonas de turismo y que, sobre todo, logren la privatización de los sectores más estratégicos, todo ello bajo el auspicio Estado norteamericano aliado a las corporaciones transnacionales, quienes a final de cuentas se hacen cargo de la construcción, administración y usufructo de los diversos proyectos productivos de la región latinoamericana.

Así, el ALCA posee un fuerte referente espacial que convierte a la ocupación y dominio del territorio en la esencia del proyecto, que, por un lado, pretende realizar la extracción intensiva de recursos naturales estratégicos y, por el otro, poseer el control militar de la región. De esta forma, para mejor explicar la manera en que los Estados Unidos trabajan para conseguir sus objetivos geopolíticos y geoeconómicos, este apartado hablará de la apropiación por parte de las transnacionales de los recursos naturales estratégicos (petróleo, gas, carbón y agua) y la ocupación real de espacios geoestratégicos.

1. El control sobre los energéticos: petróleo, gas y carbón

De la totalidad de los recursos naturales disponibles en el mercado, el petróleo, el gas y el carbón mineral más que cualquier otra mercancía evidencian un hecho: la importancia y mistificación de los recursos naturales en el llamado mundo desarrollado, a diferencia de lo que opinan los pregoneros del fin de la geografía (y de la historia). La economía global está dirigida por los hidrocarburos —gas y petróleo—, que son los motores de la producción, del transporte y del consumo y por el carbón mineral que genera en los Estados Unidos más del 80% de la energía eléctrica, vital para la producción capitalista. (Corpozulia, *Op. Cit.*:5) El 89% del consumo energético mundial se basa en combustibles fósiles y sólo los hidrocarburos (petróleo y gas natural) representan el 64% de la demanda total. (Giusti, 2001:113) De este modo, los hidrocarburos y el carbón no sólo constituyen la fuerza energética dominante en nuestro

tiempo sino que por muchos años más el mundo continuará dependiendo del consumo masivo de combustibles fósiles.

Indudablemente, una las economías que más resentiría una crisis energética sería la de los Estados Unidos pues sus reservas probadas sólo le aseguran la satisfacción de la demanda durante 7 ú 8 años²⁶, razón por la cual esta gran potencia se ve obligada a adoptar alguna de las siguientes líneas estratégicas: reforzar su política de perforación y descubrimientos de nuevos campos petroleros y de gas en su territorio; asegurar su dominio sobre otros yacimientos importantes de Medio oriente y Asia; o *ampliar las posibilidades de explotar conjuntamente, ya no sólo por acción militar directa sino mediante convenios establecidos entre gobiernos con otros países que pudieran disponer de mayores cantidades de reservas petroleras y de gas.* (Martínez Corbalá, 2001. El subrayado es mío) Esta última opción parece ser la elegida con relación a los recursos energéticos de los países latinoamericanos en general.

América Latina y el Caribe cuentan con el 10.6% de las reservas mundiales de petróleo (86% concentradas en Venezuela y México); produce el 14.4% del crudo; cuenta con el 4.7% de las reservas internacionales probadas de gas natural; con el 2.3% de las de carbón mineral —suficiente para 288 años— y con el 21.7% de la producción de hidroelectricidad en el mundo, de acuerdo a datos de finales del 2002 (Rivera, 2004:35). El consumo de energía que se requiere para el funcionamiento de la gran potencia del norte es muy alto. Si a esto aunamos la intención de crear un área de libre comercio hemisférica con tipo y niveles de producción a imagen y semejanza de los del mundo desarrollado que implicarían altos niveles de producción de energía para el funcionamiento de la infraestructura y de las zonas industriales programadas, las necesidades energéticas aumentan. Además, dadas las circunstancias de vulnerabilidad estratégica y de crisis de sucesión hegemónica por las que atraviesa, para los Estados Unidos el control sobre los recursos energéticos en el hemisferio occidental es un asunto de seguridad nacional²⁷.

De acuerdo al experto venezolano Víctor Poleo, las tres grandes cuencas con reservas de hidrocarburos en el mundo son las del Golfo Pérsico, las del Asia Central y las del cinturón bolivariano. El cinturón bolivariano está constituido por los depósitos de crudos livianos y pesados y de gas, que van desde la costa nororiental de Venezuela hasta Bolivia, pasando por Colombia, Ecuador y Perú, donde hay reservas de gas en todos ellos, de crudos convencionales (livianos) en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, y de crudos no convencionales (pesados, extrapesados y bitumen) en Venezuela y Ecuador. Además, en Colombia y Venezuela encontramos los mayores depósitos de carbón mineral en la región.

Durante mucho tiempo Estados Unidos fue el principal productor y consumidor de petróleo en el mundo. Sin embargo sus reservas se han ido agotando y en la actualidad posee tan solo el 2% de las reservas mundiales. Con el 5% de la población mundial, Estados Unidos consume el 26% del petróleo que se extrae en todo el mundo y produce sólo el 11.5% (Cabezas, 2004), lo que lo convierte en un país deficitario. Aunado a esto, Estados Unidos padece el severo problema del agotamiento de la mayor parte de sus reservas probadas y potenciales tanto de petróleo como de gas que no se compensa con los nuevos descubrimientos de Alaska y el Golfo de México. La necesidad estadounidense de organizar sus compras en diversos mercados, junto con el daño económico que le ocasiona la organización internacional de los grandes productores (OPEP), le impulsan a desarrollar diversos métodos de control de todas las zonas del mundo que cuentan con reservas energéticas, especialmente las más seguras y accesibles militar y políticamente, que son los complejos industriales y las áreas de yacimientos petroleros y gasíferos de Canadá, México y el resto de América Latina. Para los Estados Unidos es fundamental tener un acceso sin

²⁶ De acuerdo con el Departamento de Energía, tan solo el consumo de petróleo en Estados Unidos creció en 15% entre 1990 y 1999 pasando del 17 a 19.5 millones de barriles por día. (Klare, 2002)

²⁷ Como bien se sabe, la seguridad nacional es una de las consideraciones más importantes al momento en que los grupos en el poder delimitan la política exterior y se refiere, primero que nada, al fortalecimiento del Estado en todos los ámbitos (económico, político, social cultural, militar) para evitar la erosión de su poder y su extinción. Cuando se traslapa al plano internacional, la seguridad está más bien relacionada con la estabilidad y el control del conflicto entre las naciones. Para los Estados Unidos, la seguridad se verá siempre amenazada por cualquier limitación al control sobre los recursos y los mercados en todo el mundo.

obstáculos a los yacimientos de petróleo en el hemisferio occidental y para ello ha venido recurriendo a diferentes instrumentos que van desde la ocupación militar hasta la intervención indirecta para forzar los procesos de desnacionalización del petróleo, pues hasta ahora el 70% de las principales reservas de petróleo en el mundo entero están en manos de los Estados Nacionales, no de las corporaciones transnacionales²⁸. De las 20 principales empresas petroleras en el mundo, 13 son estatales y sólo 7 pertenecen al sector privado.

Las privatizaciones del sector petrolero en América Latina van desde la adquisición de las divisiones de exploración, transportación, y producción de petroquímica básica y plantas de generación eléctrica, pasando por las compañías de gas y sus redes de distribución y llegando hasta las divisiones de refinación de las empresas petroleras y sus proyectos de mejoramiento y desarrollo. Este virtual asalto aprovecha la burocratización de las grandes empresas nacionales, que fomenta su desorganización, su fragmentación y la venta paulatina de sus sectores. Después del debilitamiento deliberado de la estructura operativa de las empresas públicas mediante el retiro de los subsidios, se crea una red de filiales de las grandes transnacionales que se alían a los gobiernos locales mediante conversiones en empresas de riesgo pero también la venta de la participación del Estado en las empresas públicas, la venta de la totalidad de la empresa, o el concesionamiento de la explotación del recurso.

Debido a las grandes inversiones necesarias para movilizar los gigantescos volúmenes de petróleo que necesita el capitalismo para funcionar, la industria petrolera mundial adoptó como patrón de trabajo que las finanzas generadas por el negocio debían reinyectarse a la actividad petrolera, retroalimentando la industria. Según ese patrón, de los dos billones de dólares que genera al año el negocio petrolero, más de la mitad va para Estados industriales consumidores, una cuarta parte se reinvierte en la industria y el resto, pero cada vez menos, a los Estados productores. Así, mientras los organismos financieros internacionales proponen a los países latinoamericanos acabar con los subsidios a las empresas paraestatales y privatizar el estratégico sector petrolero para hacer frente a sus obligaciones con la banca internacional, lo que obligaría a importar los derivados del petróleo a precios del mercado internacional, en los Estados Unidos hay un subsidio de alrededor de 32 mil millones de dólares anuales a los combustibles fósiles. En ese país no solamente están subsidiados el gas y la electricidad sino que toda la actividad ligada a los combustibles fósiles tiene subsidios.

Así, las estrategias del gobierno norteamericano para la disminución de su propia vulnerabilidad en el campo energético —en 1997 consume 846,500 toneladas, una cantidad superior al doble de su producción de 320,000 toneladas— no se restringen exclusivamente a un intenso desarrollo tecnológico de los métodos de exploración, explotación, refinamiento, petroquímica, transporte y almacenamiento por medio del mayor sistema mundial de tanques, complementado por un sistema de grutas subterráneas para el almacenamiento, sino que también recurren a las alianzas estratégicas con las empresas petroleras. Además, las empresas se han con los principales grupos financieros de su país, siendo el Chase Manhattan Bank el principal accionista de Exxon, Chevron, y Mobil Oil; Morgan Guarantee es el principal accionista de Mobil Oil, así como el segundo más importante de Exxon y de la parte de Chevron que pertenecía a Gulf Oil y Union Oil of California. Citibank es el principal accionista de Arco Philips Petroleum, Conoco, Getty Oil y Exxon. (Martínez, 2003b:25). Estados Unidos se apoya en las fusiones de las empresas para la reestructuración de los mercados regionales y la apropiación de las reservas naturales e industrias energéticas. Esta es la principal estrategia de los Estados Unidos en América Latina a la que considera

²⁸ Las principales empresas multinacionales que hoy dominan los mercados petroleros son, por orden de importancia: Royal Dutch-Shell (angloholandesa); Exxon (norteamericana, dueña de lo que fue Esso, así como de gran parte de Imperial Oil, la empresa más importante de petróleo y gas de Canadá); British Petroleum (inglesa) y Amoco -recientemente fusionadas-; Mobil Oil y Texaco (estadounidenses); Chevron, dueña de lo que anteriormente fue Standard Oil of California y Gulf Oil (estadounidense); ENI (italiana); Atlantic Richfield Company (estadounidense); Elf Aquitaine (francesa); Yacimientos Petrolíferos Fiscales -YPF hoy fusionada con Repsol (argentino-española); Philips Petroleum y Conoco (norteamericanas). La Occidental -también llamada OXY (norteamericana) no es una gran empresa, pero a partir del yacimiento encontrado en Caño Limón (Colombia) inicia un despegue importante en este bloque de empresas, de las que conserva los mismos modos de comportamiento.

como el único bloque seguro económica y militarmente hablando y a la que de unos años para acá ha presionado para aumentar la producción petrolera.

La riqueza petrolera latinoamericana está ubicada principalmente en el sureste terrestre y marítimo de México, en la cuenca del Orinoco, el Golfo de Venezuela y el norte de Colombia, aunque a estas zonas habría que añadir cinco grandes complejos petroleros ubicados en Ecuador, Bolivia, (desde el centro del país hasta la frontera sur con Argentina), y las regiones del Neuquén, Negro y la Patagonia en Argentina, así como los yacimientos conocidos y subexplorados de la cuenca del Amazonas y los yacimientos conocidos del sur de Brasil en la cuenca de Campos, desde Salvador hasta cerca de Recife, y la región que va desde Natal hasta Fortaleza. Finalmente habría que tener en cuenta las enormes cuencas brasileñas subexploradas y de frontera en la cuenca del río Paraná, la cuenca del Maranhao (Parnaíba) en el nordeste brasileño y la cuenca Falkland en las disputadas islas Malvinas (Márquez, 2003:15).

Una década después de la Guerra del Golfo, el 40% de las importaciones de petróleo para los Estados Unidos proceden de América Latina. A decir de los expertos, se espera que el consumo de petróleo en los Estados Unidos crezca otros cinco millones de barriles por día en los próximos 20 años por lo que más de la mitad de ese petróleo tendrá que venir de fuentes extranjeras. (Klare, *Op. Cit.*:59) Esas cantidades fácilmente podrían obtenerse en los países del Golfo Pérsico pero los estrategas estadounidenses se resisten a que crezca la dependencia de su país hacia esa región. Así, buscan vendedores más accesibles y México, Venezuela, Colombia y Ecuador entran en ese marco pues, en cuanto al control de petróleo en Sudamérica, las pinzas del gobierno estadounidense se cierran en tres frentes:

- 1) Del Golfo de Guayaquil en Ecuador hasta el Golfo de Panamá
- 2) Del Golfo de Venezuela (incluido el lago de Maracaibo y el petróleo llevado hasta ahí desde el noreste venezolano) hasta el Golfo de Darién, en las cercanías del Canal de Panamá y el proyecto del Canal del Golfo de Urabá.
- 3) Del Mar Caribe hasta el Golfo de México. (Jalife, 2000:46)

El caso del gas natural no es muy distinto al del petróleo y también está incluido en los planes de Estados Unidos. Considerado menos contaminante que el petróleo pero sin dejar de ser un hidrocarburo, el gas natural es otro de los energéticos más codiciados en la actualidad²⁹. Estados Unidos produce el 24.5% del gas mundial pero consume el 28.7%. Ante la posibilidad de una crisis en la extracción de petróleo barato³⁰ y ante la alternativa que ofrece el gas natural, este país se ha esforzado por acaparar este recurso. En América Latina las mayores reservas de gas natural se encuentran en Bolivia y Venezuela, pero es este primer país el que mayor importancia ha adquirido por la cantidad de gas que posee, por un lado, y por los recientes acontecimientos que impidieron la exportación de gas boliviano hacia Chile, por el otro. Resulta así imperativo controlar este recurso antes de que la situación política se vuelva más convulsa y la política exterior norteamericana tiene puestas sus mayores expectativas en los gasoductos

²⁹ El gas natural está definido como la porción de petróleo que existe en los yacimientos en fase gaseosa o en solución en el aceite y que en condiciones atmosféricas permanece en fase gaseosa. Puede incluir algunas impurezas que no son hidrocarburos como ácido sulfhídrico (SO³), nitrógeno o dióxido de carbono pero entre más puro es mejor. (Secretaría de Energía, 2002:9)

³⁰ Según un dossier publicado en 1998 en la Revista Scientific America, la producción global de petróleo empezará a declinar más pronto de lo que mucha gente cree; probablemente dentro de los próximos 10 años. La publicación afirma que mientras la experiencia de la crisis energética de los setenta concientizó al mundo industrial de su dependencia de petróleo crudo barato — en 1973 el mundo había consumido sólo alrededor de un octavo de su monto de petróleo crudo de fácil acceso—, la guerra del Golfo recordó la dependencia de la producción de petróleo de una sola región: el Medio oriente. Sin embargo, dicen, la próxima crisis petrolera no será tan temporal pues mediante distintos tipos análisis del descubrimiento y producción de los campos petroleros en el mundo, han llegado a la conclusión de que dentro de la próxima década el suministro de petróleo convencional será incapaz de soportar la demanda. Sus analistas sugieren que desde una perspectiva económica no es tan relevante que el petróleo se agote sino el momento en el que la producción empiece a disminuir pues los precios se van a disparar a menos que la demanda decline, lo cual parece poco probable. Concluyen así que la caída empezará antes del 2010, pues alrededor del 80% del petróleo producido actualmente fluye de los campos que fueron encontrados antes de 1973 y la producción de la mayoría de ellos está decayendo. (Campbell y Laherrère, 1998:65)

bolivianos, que además de permitir el suministro a Brasil, mediante una triangulación con México hagan posible la llegada del combustible a los Estados Unidos.

Pero hay más combustibles estratégicos en la región andina y amazónica, además del petróleo y el gas. Un combustible fósil que pasa inadvertido en la mayor parte de los análisis sobre geopolítica de la energía es el carbón mineral.³¹ El carbón cubre alrededor del 25% de la demanda energética mundial, situándose todavía como la segunda fuente primaria, solamente despuntada por el petróleo, pero sobrepasando al gas natural, a la energía nuclear y a la hidroelectricidad. El consumo mundial del carbón aumentó en un 6.9% en el 2003; para 2004 hubo un incremento motivado por la intensificación de la demanda china, que subió en más del 15%. Los mayores depósitos de carbón están en América del Norte, Rusia y China. Sin embargo, el problema para las compañías que utilizan carbón en sus plantas generadoras de energía es que los costos ambientales en los países desarrollados por la explotación del carbón son muy altos, sumado a las restricciones de la utilización de determinados químicos. Son conocidos los casos de empresas multadas por las emisiones anuales de óxido de nitrógeno y de dióxido sulfúrico, debido a que ambas sustancias pueden causar enfermedades respiratorias graves. Al quemar el carbón se liberan grandes cantidades de gases responsables de efectos tan nocivos como la lluvia ácida, el calentamiento global y la formación de smog.

Hay que tener en cuenta que sólo en los Estados Unidos el 56% de la energía comercial generada se produce con base en el carbón mineral (Appenzeller, 2004a:94) aun cuando este combustible es altamente contaminante y cuando otros países desarrollados están intentando crear energía limpia para cumplir las condiciones del Protocolo de Kyoto, el cual Estados Unidos se niega a firmar³². El uso indiscriminado del carbón en Estados Unidos se basa en un criterio meramente económico: a diferencia del petróleo y el gas, el carbón es abundante en su territorio, lo cual lo convierte en la opción más barata para generar energía eléctrica. Sin embargo, aunque sea un combustible no deficitario, en los planes de la política exterior norteamericana, el control sobre la propiedad y la comercialización del carbón mineral resulta prioritario, sobre todo en el caso de Venezuela, donde se piensa desarrollar el complejo carbonífero del noroeste.

Como las regulaciones ambientales son más estrictas en los países desarrollados, resulta más fácil y barato extraerlo de fuentes externas como Venezuela, donde sólo en el Guasare están 96% de las reservas nacionales del carbón. En este país las empresas transnacionales que ahí operan no pagan daños ambientales, tienen mano de obra barata y se llevan un carbón de excelente calidad, sin tantos residuos de azufre. Los estrategas de los Estados Unidos están particularmente interesados en el carbón de esta región de Venezuela —también hay depósitos de carbón en el nororiente venezolano pero ni son tan abundantes y de buena calidad ni quedan tan cerca— por una razón económica y de logística: el carbón producido en el oeste de ese país norteamericano es más barato que el producido en el este, donde además las restricciones de azufre, el costo de producción es más elevado y las decisiones legales para reducir la creación de energía eléctrica con base en el carbón mineral han reducido el incentivo para incrementar capacidad de producción de ese combustible. Este hecho le da ventajas a los productores de carbón de Colombia y Venezuela por la cercanía que tienen con la costa este de los Estados Unidos y por la calidad de su carbón.

2. La ocupación del territorio amazónico y el control de sus recursos

³¹ Este tipo de carbón es un combustible sólido de color marrón o negro que contiene esencialmente carbono y en pequeñas cantidades hidrógeno, oxígeno, azufre y otros. Proviene de la degradación durante un largo periodo de organismos vegetales y su importancia radica en su capacidad calorífica, que es muy alta, y en su costo, que es muy bajo con relación al del petróleo y el del gas.

³² Estados Unidos ha venido desdeñando la firma de este Protocolo argumentando un problema de costos. Sin embargo, aun cuando se siguiera al pie de la letra lo acordado en Kyoto, apenas si se retrasaría en mínima medida el aumento de los gases de efecto invernadero, que son producidos por la ignición de los combustibles fósiles y que aumentan el volumen del carbono en la atmósfera.

La Cuenca del Amazonas o Amazonia³³ es la región que comprende los territorios bañados por el río Amazonas, el más caudaloso del mundo, y sus afluentes. El río Amazonas nace en los Andes de Perú y atraviesa Brasil. Tiene unos 6 500 km de largo, su anchura algunas veces sobrepasa los 6 km y cuenta con más 7 mil ríos tributarios por donde corren más de 6 mil billones de metros cúbicos de agua por segundo. Así, su caudal lleva más agua que el Nilo, el Mississipi y el Río Amarillo unidos. En su primer tramo, el Amazonas recibe el nombre de Marañón y cerca de su desembocadura en el Atlántico, se abre en numerosos brazos, entre los cuales forma diversas islas. La Amazonia recicla más de la mitad del agua que circula en el ecosistema regional, que contiene más del 20% del agua dulce del planeta, capta más de 50 millones de toneladas de oxígeno y contiene buena parte de las especies conocidas en el mundo.

En la actualidad, la mayoría de las aéreas deshabitadas en esta región presentan aún algunas posibilidades para el descubrimiento y la explotación de petróleo, minerales y otros valiosos recursos naturales. En la hoya amazónica se pueden encontrar grandes depósitos de carbón, hierro, cobre, aluminio, estaño, plata, bauxita, berilio y tungsteno, todos ellos metales importantes para la producción industrial. En la parte de Bolivia hay también manganeso, mercurio, antimonio, cromo, níquel, zinc y molibdeno. Por eso se dice en esta región que comparten Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Guyana, Surinam y Colombia, existen cuatro de las materias principales para la economía —y la vida— del tercer milenio: el oxígeno (la amazonía produce más del 40% del oxígeno del mundo); la biodiversidad; los combustibles fósiles (el petróleo y el gas) y el agua dulce (casi el 30% del agua dulce renovable está en América Latina y la mayor parte en la Amazonia). (Cabieses, 2002:14) Así pues, un objetivo geopolítico de los Estados Unidos en Sudamérica es controlar la Amazonia, región con uno de los ecosistemas más ricos y diversos de la tierra, considerada en los medios científicos como el territorio donde está el futuro de la humanidad debido a sus grandes reservas de agua, flora, fauna, hidrocarburos y minerales.

Con sus con aproximadamente 7 millones 160 mil km², la grandeza del territorio amazónico no ha sido ignorada por los estrategas internacionales, especialmente por los de lo Estados Unidos, que tampoco dejan de advertir que de ese total de territorio más de la tercera parte (1'800.000 kilómetros cuadrados) es una gran extensión completamente plana fundamental para desarrollar industrias agrícolas y pecuarias intensivas en capital y tecnología y poco intensivas en mano de obra y muy rica en agua potable subterránea, hecho que facilitaría su extracción e interconexión a través de extensos ríos navegables que van del Pacífico al Atlántico.

De mano de la construcción de un gran sistema infraestructural y fluvial a lo largo del Amazonas y el Orinoco y sus afluentes que permita la movilidad de mercancías así como la generación de energía eléctrica, está también la necesidad de controlar una de las zonas con mayor cantidad de depósitos de agua potable en el mundo que posee gran riqueza como reservorio de aguas subterráneas. Si se considera que los grandes conflictos del futuro, al igual que las alianzas políticas e intereses compartidos, se expresarán en torno al control y posesión del agua, la propiedad e información biogenética y las telecomunicaciones, veremos la importancia y real dimensión de los grandes reservorios de agua de la Amazonia.

El agua dulce y potable es indispensable para una amplia variedad de actividades humanas pero existe en cantidad limitada. El agua es absolutamente esencial para la salud y la supervivencia humana: para beber, para la higiene y la salubridad y para la producción de alimentos. Según el Banco Mundial, la cantidad mínima diaria que necesita un ser humano para vivir en un buen estado de salud es de 100 a 200 litros pero si se suma esta fracción a la de la necesidad total que incluye el agua utilizada en la agricultura, la industria y la generación de energía, se llega a los 1 000 metros cúbicos por persona al año (The World Bank, 1994:11). Si vemos las cifras globales sobre el consumo de agua, en Estados Unidos un habitante promedio consume cada año 2 300 metros cúbicos; a su vez, la Unión Europea más Japón consumen 900 metros cúbicos, según datos calculados con base en el uso doméstico y consumo diario de

³³ Hay que distinguir entre *Amazonía* —denominación utilizada al interior de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, que sirve para designar a los territorios de sus países que se localizan dentro de la cuenca amazónica— y *Amazonia*, —que fonéticamente equivaldría a “amazónia”— nombre de la cuenca del río Amazonas.

productos industriales cuyo procesamiento demanda agua (papel, plásticos, alimentos, electricidad, refrigeración). En India, en cambio, el 93% del agua que se utiliza es destinada para regar los campos y producir alimentos. (*Ibidem*)

Aunque el 70% de la superficie terrestre esté ocupada por el agua, la mayoría es salada; la proporción de agua dulce es de sólo 3%. De ésta, aproximadamente las dos terceras partes se hallan inmovilizadas en los glaciares y en los casquetes de hielo de los polos y parte del resto está oculta en forma de humedad del suelo y acuíferos subterráneos. En consecuencia, la población humana accede a menos del 1% de la existencia del agua dulce o aproximadamente 0.01 % de toda la que contiene el planeta. Y de ésta sólo 12 500 km³ de los 110 000 km³ de agua dulce de las precipitaciones que caen en un año, son las que tenemos disponibles como recurso renovable para consumo humano, riego y otros usos esenciales. (Klare, 2001:143)

Pero el agua no se va a acabar al mismo tiempo en todos los sitios del planeta. La cuenca amazónica no tendría problemas en el futuro próximo ya uno solo de sus ríos, el Amazonas, representa aproximadamente un 16% de la escorrentía³⁴ anual del mundo mientras otras zonas tan sólo reciben el 2% de la misma pero constituyen el 40% de la superficie no sumergida y alojan aproximadamente la quinta parte de la población mundial. (*Ibid*:145) Como en los últimos años importantes voceros de la comunidad científica han dado a conocer a la opinión pública internacional que el agua dulce, proveedora del agua utilizada para uso doméstico e industrial se está acabando, el agua se ha vuelto un recurso natural altamente codiciado entre las grandes potencias. Puesto que en la Cuenca del Amazonas existen las mayores reservas de agua dulce en el planeta —almacena cerca del 25% del agua fresca mundial— ésta se ha convertido en un blanco ineludible de las estrategias de Estados Unidos.

Si bien es cierto que a lo largo de la historia ha sido una fuente de conflictos y ambiciones en torno a dos asuntos principales —la fluvialidad, es decir, el control de los ríos y de sus cuencas con sus afluentes y la bioceanidad la capacidad de tener acceso a dos océanos— y que durante los siglos XIX y XX, fue objeto de disputas entre Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Francia dejando bien claro su papel en la geopolítica regional, no lo es menos que este río y sus afluentes serán objeto de disputa geopolítica en los próximos años no sólo entre los países que posean territorio en la zona sino entre otros como Estados Unidos, Francia, y Rusia, que en fechas recientes soltaron la tesis de que la Amazonia, al ser el pulmón del mundo y patrimonio natural de la humanidad, y al estar mal protegida por los latinos, debe ser controlada por sus fuerzas armadas. La gran cantidad de recursos hídricos que posee la cuenca amazónica de ninguna manera es desdeñada en los planes de política exterior de las grandes potencias, sobre todo de Estados Unidos. Tan sólo el llamado ‘Acuífero Guaraní’, el más importante de la región y que se reconoce como el acuífero más grande del mundo tiene una extensión de alrededor de 1,190,000 (más de la mitad de la superficie total de México, que es de 1 972 550 km²).³⁵ (CAF, *Op. Cit*:13)

Sin embargo, lo cierto es que Estados Unidos y sus transnacionales intentan desde ahora que la crisis no es tan evidente, acaparar la propiedad sobre tan elemental recurso cuya escasez lo puede volver una mercancía muy cara. Las corporaciones transnacionales del agua están empezando a presionar para conseguir la privatización del líquido en los países latinoamericanos. Como una gran cantidad de agua dulce se destina a fines industriales, las transnacionales están interesadas en prestar el servicio de

³⁴ La escorrentía es el agua que se origina como precipitación sobre la tierra y luego se escurre por la misma hasta llegar a los ríos, corrientes y lagos, llegando finalmente a los océanos, mares interiores o acuíferos, a menos que primero se evapore. La porción de escorrentía de la cual puede dependerse año tras año y fácilmente aprovechada por el hombre se denomina escorrentía estable.

³⁵ El Acuífero Guaraní, la mayor reserva mundial de agua dulce del planeta, ya comienza a ser privatizado. De acuerdo a información dada por el Movimiento de los Sin Tierra, Nestlé compró las fuentes en el municipio de Armazén, estado de Sta. Catarina, en Brasil y Coca Cola está posicionándose en Paraguay. Durante el régimen de Henrique Cardoso en Brasil se entregó al Banco Mundial la coordinación de los estudios sobre el Acuífero Guaraní, el más grande del planeta, con el detalle de que las informaciones no estarán ni a disposición del gobierno brasileño ni de los ciudadanos de Brasil. (Chérrez, *Op. Cit*:10)

suministro a este sector en especial. Entre las industrias que más consumen en América Latina se encuentran la Coca Cola, las del sector de la minería metálica, la agroindustria, las plantaciones forestales, entre otras. (Chérrez, *Op. Cit.*:11)

Entre 1990 y 1995 el BM y el BID dieron 21 préstamos a países subdesarrollados en los que condicionaba la entrega del dinero a la privatización del agua. Entre 1996 y 2002 el número aumentó a 61. Ecuador es un ejemplo de esto: en julio de 1997 este país andino se endeudó con el BID con un préstamo de 40 millones de dólares para sentar las bases de la privatización del agua de Guayaquil, con la que se beneficiaría la empresa Interagua, subsidiaria de la International Water Group of Netherlands y Bechtel, empresa responsable de la guerra del agua en Bolivia y que recibió enormes beneficios de la invasión de Estados Unidos en Irak³⁶, además de ser la empresa de agua más grande de Estados Unidos. Global Water Partnership, especie de organización que asocia a empresas que prestan el servicio privado de suministro de agua y alcantarillado, ha venido haciendo una campaña en los países sudamericanos en la que impulsa la explotación de los mercados de agua superficial y subterránea, la transferencia del agua —desde los usos de menor valor a los de mayor valor o rentabilidad— y las subastas públicas para ofertar el agua. Además, considera que “las reformas impopulares pero necesarias como el aumento de tarifas, la recolección de cuentas no pagadas, la reducción de la fuerza laboral, entre otras, deben ser realizados por el sector privado internacional”. (www.gwp.org, 2002)

Pero no sólo la posesión y comercialización del agua dulce que posee la cuenca amazónica interesa a Estados Unidos y a sus corporaciones transnacionales. La Amazonia es la primera reserva biótica terrestre del planeta; es la depositaria de la mayor extensión de bosques tropicales del planeta —hay más 20 mil especies de árboles— y de una gran variedad biológica de ecosistemas, especies y recursos genéticos, lo que la hace presa fácil de las ambiciones de las empresas dedicadas al desarrollo de la biotecnología³⁷, que patentan y comercializan muchos de estos recursos genéticos vegetales y animales obligando a la humanidad a pagar por el uso de recursos que a todos nos pertenecen, o en todo caso, a ninguno de nosotros sino a la propia naturaleza. Tan sólo cinco empresas de biotecnología vegetal en el mundo (AstraZeneca, DuPont, Monsanto, Novartis, y Aventis) obtienen más del 60% del mercado de pesticidas; 23% del mercado de semillas y 100% del mercado de semillas transgénicas. (GASETC, 2001:ii-iv)

Desde hace varias décadas las grandes multinacionales de la biotecnología tienen puestos sus ojos en el control de algo vital para la reproducción de los pueblos del planeta: los alimentos, a los cuales “mejoran” y hacen más resistentes a las plagas. Una de las industrias más importante en este ramo, la Monsanto, es la proveedora de los principales químicos rociados sobre los cultivos ilícitos en la región andina. Pero Monsanto, empresa estadounidense, no sólo fabrica herbicidas —últimamente ha entrado en el campo de la manipulación genética³⁸— ni ha sido lo único que ha producido en el pasado. En la década de los setenta, desarrolló el agente naranja (defoliante) y el napalm (gelificador abrasivo) que Estados Unidos usó amplia e indiscriminadamente contra Vietnam. Desde ahí, Monsanto, apoyada con dinero

³⁶ En Cochabamba, Bolivia, después que la distribución del agua potable fue concesionada a Bechtel, la tarifa mensual de agua subió 400%, de 5 a 20. Bechtel tuvo que salir de Bolivia pero demandó por 25 millones de dólares a Cochabamba por las oportunidades de ganancias no percibidas. Un año y medio después, tras la invasión a Irak, la administración Bush le otorgó como un contrato de \$680 millones para participar en la reconstrucción de Irak. En el directorio de Bechtel está George Schultz, que fue Secretario de Estado en el tiempo de Reagan, y acaba de ser nombrado Jefe del Comité para la *Liberación* de Irak.

³⁷ En términos generales la biotecnología se puede definir como el uso de organismos vivos o de compuestos obtenidos de organismos vivos para obtener productos de valor para el hombre. La biotecnología moderna está compuesta por una variedad de técnicas derivadas de la investigación en biología celular y molecular, las cuales pueden ser utilizadas en cualquier industria que utilice microorganismos o células vegetales o animales. Es la aplicación comercial de organismos vivos o sus productos, la cual involucra la manipulación deliberada de sus moléculas de DNA. (Knight, 2001b:155)

³⁸ Monsanto ha llegado al límite de patentar una semilla que esteriliza las simientes que produce, por lo que éstas no sirven para poder plantar al año siguiente, lo que obliga a los productores a comprar nuevas semillas. Esta semilla es denominada por los ecologistas como "terminator". También ha modificado una mala hierba que ahora produce plástico flexible. (Valente, 2001:132)

público, está entre las empresas que tienen una alta capacidad de modificar bacterias, virus, hongos y otros organismos y convertirlos, además, en armas y entre las compañías con representantes en el gabinete de George Bush: poca gente sabe que Donald Rumsfeld, Secretario de Defensa, antes de ser designado en ese cargo fue presidente y director ejecutivo de GD Searle & Co., multinacional farmacéutica que se fusionó con Monsanto.

La Amazonia es el mayor banco genético del mundo, la mayor fábrica mundial de productos farmacéuticos, bioquímicos y agronómicos y es la mayor fuente para el conocimiento del funcionamiento de los sistemas vivos y para la combinación de los genes en ellos contenidos, base de la ingeniería genética. El dominio del banco genético amazónico asociado a la reorganización del planeta y grandes bloques bajo la hegemonía de algunas potencias es otra de las raíces básicas de la presión sobre la Amazonia. La posibilidad de la internacionalización de la Amazonia puede parecer una mentira en la medida en que la ocupación militar no parece estar a la vista de la opinión pública internacional; sin embargo, la acción de las corporaciones transnacionales en la región y la intervención estadounidense en los ejércitos locales, así como las actividades de varias organizaciones filantrópicas y de agencias de organismos internacionales que se escudan en su preocupación por el cuidado del equilibrio ecológico de la región descubre la perversidad política de una ocupación indirecta y no excluye la realidad de las presiones políticas de los gobiernos sobre los países de la región.

III. EL ALCA, LAS CORPORACIONES TRANSNACIONALES Y PRESENCIA MILITAR DE ESTADOS UNIDOS EN AMÉRICA LATINA

Lejos de lo que pudiera pensarse, el ALCA y sus proyectos para integrar físicamente los países latinoamericanos, pensados para controlar tanto las vías de comunicación (terrestres, fluviales y aéreas) como los recursos naturales estratégicos (energéticos, agua y biodiversidad) poseen una fuerte carga bélica y contribuyen a la ocupación militar de los Estados Unidos en la región. El avance militar es parte ineluctable de la estrategia comercial de los Estados Unidos en el hemisferio y la acción de las corporaciones transnacionales, que implica el control físico y económico sobre los recursos estratégicos, aunada a la presencia norteamericana en la región, sostienen esta afirmación. Sin embargo, esta conclusión no basta: resulta necesario exponer la manera en la cual a pesar de no ocupar militarmente la región, los Estados Unidos no dejan de intervenir en la vida política de América Latina, en tanto que la intromisión militar estadounidense va íntimamente ligada a la injerencia en la esfera comercial. Así, se explicarán primero los planteamientos geoestratégicos que determinan la presencia militar estadounidense en América Latina y su relación con el libre comercio; segundo, se evidenciará la creciente y constante militarización de la región.

1. Estrategia militar estadounidense y libre comercio

Dentro del planteamiento geopolítico y geoestratégico de la política exterior estadounidense hacia América Latina el elemento militar cumple una función muy importante en tanto que el mundo del comercio necesita una estabilidad mínima para desarrollarse. Como es casi imposible controlar un vasto espacio geográfico rico en recursos naturales estratégicos sin el uso de la coerción, una de las aspiraciones históricas de los Estados Unidos –condición necesaria para garantizar su seguridad nacional y exigencia para reafirmar su hegemonía en la región y proyectarla hacia el mundo– ha sido propiciar un tipo de integración que además de lo comercial se proyecte en las esferas políticas y militares.

Las transformaciones del capitalismo global también impactaron directamente en la planeación estratégico-militar de la política exterior de Estados Unidos hacia la región. En un documento denominado Defense Planning Guidance (DPG), donde se plasman las líneas de acción para la planeación militar, elaborada para el periodo 1994-1999, se establece que los Estados Unidos deben tomar en cuenta los intereses del capital de las grandes naciones industrializadas a fin de “disuadirlas de retar nuestro liderazgo o de tratar de dismantelar el orden político y económico establecido” añadiendo que “debemos mantener los mecanismos para disuadir a cualquier competidor (que aspire) a jugar un papel regional

mayor o uno de orden global” (Saxe, 1994: 158). Esta disuasión se inscribe dentro de los tres elementos centrales de la geopolítica estadounidense hacia América Latina:

- a) que ninguna potencia externa la use como base para lanzar ataques al norte
- b) que debe evitarse el surgimiento de cualquier alianza entre las naciones latinoamericanas que pudiera retar el dominio hemisférico de los Estados Unidos
- c) que ninguna nación latina deba llegar a ser lo suficientemente fuerte para lograr ese fin. (Saxe, *Op.Cit*: 159).

Aunque en el discurso los países de América Latina estén atravesando por una “transición a la democracia” lo cierto es que la militarización de la vida política continúa. Los despliegues de fuerza y de los programas militares de los Estados Unidos se siguen realizando principalmente por dos razones: la primera, porque los PAE contienen medidas que funcionan como desestabilizadores sociales, como por ejemplo, la desaparición de los subsidios, el recorte en el gasto social, entre otros, y que pueden desencadenar una guerra interna. Y si bien es cierto que el respaldo al FMI resulta más rentable en términos económicos y políticos que el mantenimiento de toda la comunidad militar y de inteligencia, la fuerza debe estar lista para cuando sea necesario. Los Estados Unidos no pueden permitir la ascensión a los gobiernos latinoamericanos de poder de grupos que vayan en contra de sus intereses, sobre todo si la nación en cuestión se encuentra contemplada dentro de los planes geoestratégicos del gobierno estadounidense en contubernio con las corporaciones transnacionales. En segundo lugar porque el negocio de la venta de armas deja muchas utilidades a las grandes corporaciones estadounidenses que tras el fin de la guerra fría se fusionaron creando poderosos emporios. La venta de armamento a América Latina tiene así dos fuerzas impulsoras: la presión de los fabricantes de armas para lograr nuevos clientes³⁹ y la burocracia militar para preservar la infraestructura bélico industrial de la gran potencia del norte.

El proyecto panamericano del libre comercio no se limita únicamente al ideal de la integración económica: tiene su correspondiente en el plano militar que se expresa en una doctrina que apela a la democracia solidaria y a la defensa común. Esta doctrina ha servido desde hace algunos años como el mecanismo ideológico destinado a mantener la hegemonía estadounidense en la región. Así, dentro de la Gran Estrategia elaborada en los Estados Unidos para América Latina, donde el libre comercio ocupa un papel central, está incluida si no *la ocupación directa* del territorio latinoamericano por el ejército norteamericano, sí *la intervención directa* a través de las acciones de política económica de los gobiernos nacionales, de las actividades de las ubicuas corporaciones transnacionales y de las operaciones de las policías y ejércitos locales, engarzadas todas en la tarea de la integración comercial.

Esta integración, sin embargo, no se puede desarrollar bien sin el control real del territorio, que pasa por el control del espacio a manos de las transnacionales en tiempos de paz mientras se piensa al mismo tiempo en dominar las vías para controlar el acceso a bienes estratégicos y a lugares importantes en caso de guerra. Sólo se logra el control político cuando se tiene control del espacio. A una integración comercial –que por sus características adquiere un halo de subordinación política– corresponde una integración más bien física y militar que termine por materializar los objetivos geopolíticos y geoeconómicos de la política exterior de los Estados Unidos y por trazar en un mapa –la evidencia por excelencia del control sobre el espacio– los ejes del poder en América Latina.

El desmantelamiento del bloque soviético que significó un duro golpe a las guerrillas centroamericanas, la problemática de la deuda externa latinoamericana, el establecimiento de los PAE, la *derechización* de la política a nivel internacional y, sobre todo, los cambios en el capitalismo global que hicieron manifiesta la precaria situación de la economía estadounidense, dieron pie a un cambio en la gran estrategia estadounidense que se reflejó en la vertiente militar de su política exterior. Como el discurso que acusaba al “comunismo” de ser el principal enemigo de la humanidad empezaba a parecer obsoleto e increíble, otros problemas que el reduccionismo de la bipolaridad ocultó empezaron a aflorar.

³⁹ Según Fortune, 25 corporaciones de Estados Unidos ligadas al negocio militar se han venido beneficiando desde el conflicto del Golfo Pérsico. Entre las más conocidas están IBM, General Motors, Ford, Chrysler, General Electric, Raytheon, Intel, Boeing y McDonnell Douglas. (Fortune, 2003)

Súbitamente y como si no hubiesen existido antes, el narcotráfico, la crisis económica, la pobreza y la migración, todos ellos con un origen tercermundista común, empezaron a ser considerados como los principales desafíos para la seguridad nacional estadounidense.

A principios de la década de los noventa, con la llegada de William Clinton al gobierno estadounidense y sus ideas de modernizar las fuerzas armadas ante la necesidad de armonizar el aparato militar con la realidad económica, se inició un periodo de reordenamiento en el aparato militar estadounidense que disminuía costos y aumentaba la efectividad. Esta reorganización afectó la estrategia militar estadounidense hacia América Latina. De esta forma, se crearon las Fuerzas Conjuntas Adaptables (Adaptive Joint Forces Package). Bajo esta modalidad, los comandos combatientes regionales solicitarían el tipo de fuerzas requerido para emplearlas en un plazo de 6 meses a un año.

Estas fuerzas serían adiestradas por los servicios militares (Ejército, marina, fuerza aérea, etc.) esperando estos pequeños paquetes permitan la organización de fuerzas militares más pequeñas y flexibles. La lógica era no gastar el presupuesto en un adiestramiento general dirigido hacia una gran cantidad de oficiales sino adiestrar a unos pocos —los mejores— en tareas a pedido, o sea que no se les entrenaría en tareas que nunca llevarían a cabo. Así, los paquetes de fuerzas se conjuntaron en torno a cuatro grupos: fuerzas estratégicas (Strategic Forces), fuerzas Atlánticas (Atlantic Forces), fuerzas del pacífico (Pacific Forces) y fuerzas de contingencia (Contingency Forces). Cada una de ellas se especializaba en las tácticas útiles para la región que se le había asignado. Así, bajo el pretexto del narcotráfico durante los ochenta y noventa y ahora del terrorismo, continúa siendo promovida la presencia de tropas estadounidenses en el hemisferio.⁴⁰

Aunque a conveniencia del aparato militar y de las corporaciones transnacionales ligadas a esa industria el enemigo haya cambiado, los planes del panamericanismo militar continúan y se han fortalecido a raíz de la negociación y firma de tratados comerciales entre los Estados Unidos y los distintos países de América Latina siguiendo la lógica de que el vínculo económico se afianzaría mucho más con un vínculo militar. En este momento histórico, los Estados Unidos no han querido desaprovechar la enorme disposición de los gobiernos neoliberales latinoamericanos a negociar sin apenas pedir algo a cambio.

En vistas de consolidar ese *tercer vínculo*⁴¹, el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos a cuyo frente estaba William Perry, organizó una Reunión de Ministros de Defensa de las Américas en julio de 1995 en Williamsburg, Virginia. Entre las discusiones más sobresalientes se encontraron dos: las de la Doctrina Cheney —concebida cuando Richard Cheney era el jefe del Departamento de Defensa en la administración de Bush padre— que buscaba la militarización de América Latina bajo el ala de las fuerzas armadas estadounidenses; y la de la firma de los ejércitos latinoamericanos en un documento sobre planificación estratégica de defensa bajo control externo que terminaría en la eliminación gradual de las fuerzas militares de la región para sustituirlas por fuerzas especializadas bajo en control de los Estados Unidos.

Poco tiempo después de este encuentro, en 1996, bajo el pretexto de dar una mejor lucha contra las drogas en el continente americano, los Estados Unidos levantaron el embargo de venta de armas perfeccionadas, reservándose el derecho de decidir a qué país vender, el monto de lo vendido y la forma de pago del equipo militar debilitando o fortaleciendo de esta forma al país que así convenga a sus intereses. Con el triunfo de George Bush hijo en las elecciones presidenciales de noviembre de 2000, Dick Cheney llegó nuevamente a las más altas esferas del gobierno estadounidense aunque esta vez como vicepresidente y no como ministro de Defensa. La propuesta de militarizar a las fuerzas armadas latinoamericanas bajo la égida de los Estados Unidos se recalentó y muy pronto se intentó concretar. En la

⁴⁰ Especialmente con el fin de la guerra fría, las tropas estadounidenses se han movido de manera particular alrededor de Brasil, la nación de América Latina con mayores potencialidades geopolíticas por su dimensión geográfica, población, recursos forestales, hidráulicos, minerales, tecnológicos, etc.. Debe recordarse que Brasil es el único país latinoamericano que ha puesto serias trabas al ALCA.

⁴¹ William Perry, ministro de Defensa de Clinton, llamó así al vínculo militar. El primero y segundo vínculos eran el político y el comercial.

III Cumbre de las Américas de abril de 2001, a la par que se acordaban los términos para culminar la negociación del ALCA, se platicaban también las formas para amarrar ese *tercer vínculo* del que hablaba Perry.

Este asunto tan poco tratado por la prensa de los países latinoamericanos pero primordial en la concepción estratégica de los Estados Unidos, se centraba en la acción del gobierno estadounidense para fomentar la cooperación y el entrenamiento de las fuerzas armadas de todo el hemisferio a fin de participar en actividades de mantenimiento de la paz de la ONU en el marco del ALCA. Este país propuso también que hubiera una mayor distribución de documentos de política y doctrinas de defensa, intercambios de personal e información e incluso participación y entrenamiento en deberes de salvaguarda de la ONU. Curiosamente, días después de la Cumbre de Quebec, el gobierno mexicano propuso desaparecer el TIAR⁴² o cambiar su contenido en el entendido de renovarlo y adecuarlo para afrontar y acabar con las “nuevas amenazas”, entre las que se incluían el narcotráfico y el terrorismo. El gobierno mexicano habló del TIAR como una reliquia del mundo bipolar que definitivamente tendría que ser modernizado. La idea era utilizar la infraestructura militar y los programas creados a la luz de la lucha contra el comunismo en los años de la guerra fría.

Bajo la coartada del control de narcotráfico y el terrorismo, los Estados Unidos están penetrando poco a poco en las instituciones latinoamericanas encargadas de cuidar la integridad y la soberanía nacionales y está desarticulando los obstáculos a sus planes estratégicos en la región. La militarización de la lucha antinarcóticos, primero, y contra el terrorismo ahora, se ha venido efectuando en puntos estratégicos del hemisferio. Como los países de mayor producción de drogas en América Latina, que curiosamente son los mismos que se encuentran amenazados por el terrorismo, son Bolivia, Colombia y Perú, además de los países de la Triple Frontera (Argentina, Paraguay y Brasil), las operaciones militares se han venido concentrando alrededor de la costa norte de América del Sur y en toda la frontera del Amazonas, región marcada “por las disputas de fronteras y la ocupación clandestina de territorios y donde Washington ha establecido ya un cinturón militar en torno a la selva amazónica, con el establecimiento de bases con radares en Colombia, Bolivia, Venezuela, Guyana” (Saxe, *Op. Cit.*; 163), además de Paraguay y Argentina. De esta forma, la militarización estadounidense en América Latina ha venido propiciando un clima de guerra de múltiples niveles estratégicos en cuyo trasfondo se puede observar la ambición por el control y la apropiación por parte de los Estados Unidos de los recursos geoestratégicos —petróleo, agua, maderas, plantas y minerales así como canales, istmos, Golfos, puertos y aeropuertos— que se encuentran en el espacio, suelo y subsuelo de nuestra región, especialmente en la región andina y amazónica.

2. La presencia militar estadounidense en América Latina

El fin de la guerra fría y los cambios en la economía mundial hicieron necesario un reposicionamiento geopolítico de los Estados Unidos en Latinoamérica. En la actualidad ese país tiene más personal militar y de inteligencia desplegado en América Latina y el Caribe que durante la guerra fría. Los programas de adiestramiento militar y los programas de transferencia de tecnología militar de utilidad se acentuaron en la región con excusa de la lucha del narcotráfico y ahora contra el terrorismo, lo que evidencia el retorno de la Gunboat Policy (Diplomacia de las Cañoneras), donde se consigue imponer la voluntad de una gran potencia a costa de la intimidación de un país. El Plan Colombia, como el mayor plan de ayuda “antidrogas” y “antiterrorismo” en la historia latinoamericana, es un indicador alarmante de la creciente y peligrosa militarización de esa lucha y el cambio en el papel de los ejércitos latinoamericanos en los nuevos tiempos, dentro de un esquema de subordinación bajo el ala del Pentágono, estrategia a la que Estados Unidos está apostando claramente, pues no sólo ha fortalecido sus vínculos con los altos mandos militares sudamericanos sino también con los de Centroamérica.

⁴² En 1947), en su esfuerzo por contener “la oleada comunista” en América Latina, los Estados Unidos promueven la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) que en su artículo 3 sección I postula que cualquier ataque armado a cualquier Estado americano será considerado como un ataque contra todos los Estados americanos. Además de ser una barrera contra el “comunismo”, el TIAR estaba dirigido a establecer un sólido control del Pentágono sobre los institutos armados en nombre de la común doctrina estratégica.

La exacerbación de las relaciones de fuerza de los Estados Unidos hacia el espacio ocupado por la región andina y la cuenca amazónica, considerable ya desde la presidencia de Ronald Reagan, ha venido a acentuarse en la actual administración del hijo de George Bush y ha quedado plasmada muy claramente en el documento de Santa Fe IV⁴³, donde se aconseja enterrar las políticas permisivas y liberales de Bill Clinton. Según el documento, entre los nuevos desafíos para los Estados Unidos se encuentran, a nivel continental, “los capitanes de la droga en América del Sur, especialmente las FARC y el ELN de Colombia, el castrista Chávez de Venezuela y el surgimiento de un militarismo izquierdista en los países andinos” (Bonasso, 2001) Además, identifica en América Latina las nueve “D”: defensa, drogas, demografía, democracia populista, desestabilización, deforestación y declinación de Estados Unidos, ésta última por culpa del abandono que se operó durante la administración Clinton, que privilegió las relaciones con Europa y China.

Según el Santa Fe IV, los principales elementos geoestratégicos que siguen siendo importantes para la seguridad nacional de los Estados Unidos en América Latina y que hay que preservar a través de cualquier medio, incluido el militar, son:

- 1) el control de los estrechos Atlánticos
- 2) el uso del Canal de Panamá, que fue devuelto en 1999 a Panamá, porque según los autores del documento estaría siendo operado por compañías de cobertura de los chinos
- 3) una ruta “comercial” sureña alrededor del cabo de Hornos
- 4) la seguridad de que los países del hemisferio no son hostiles a las preocupaciones de seguridad nacional de Washington. *Además que los recursos naturales del hemisferio estén disponibles para responder a sus prioridades nacionales.* (Bonasso, *Op. Cit.* El subrayado es mío)

Otra de las mayores pruebas de que bajo el ALCA subyace un objetivo militar, es el avance de la militarización en Colombia en particular y los andes y la Amazonia en general. Más que para una intervención al estilo clásico, donde las fuerzas armadas estadounidenses ocupan el territorio y se estacionan en todo el país, el Plan Colombia está sirviendo como un instrumento militar para **focalizar** los conflictos de los países de la cresta andina y cuenca amazónica, evitar su propagación y eliminarlos conjuntamente con otros ejércitos. Esta focalización ha llevado al Pentágono a colocar bases militares y radares en lugares estratégicos. Estos radares han sido colocados —todos ellos bajo la excusa de la interceptación de aviones cargados con drogas ilícitas— en la Guajira, en el centro en la base militar de Tolemaida y otro en Tres picos. El Plan Colombia incluye también la instalación de un tercer radar en Venezuela en la localidad de San Fernando de Atabapo, a 700 kilómetros al sur de Caracas, en la frontera con Colombia. Este radar se suma a los que ya están activos en la Península de Paraguaná, al norte y en la isla de Margarita. (Garrido, 2003:46)

En cuanto a las bases militares en Colombia donde hay personal estadounidense, existen en **Leticia** (frontera con Perú y Brasil), en **Apiay**, en **Tolemaida** y, sobre todo, en el sur del país, en el territorio amazónico. La llegada en agosto del 2000 de 88 asesores militares estadounidenses⁴⁴ a la base del ejército colombiano en **Larandia**, Caquetá, en la amazonia, fue la señal de una cada vez más creciente injerencia de fuerzas especiales del Pentágono en ese país sudamericano. Esta localidad (Larandia) se encuentra a sólo 55 km de lo que fue la zona de despeje de la guerrilla. La presencia de estos boinas verdes, decía sin tapujos un oficial estadounidense, tienen la misión de realizar una “ofensiva contra el narcotráfico y las FARC”. (*Ibid*:43)

Sin embargo, quizá la base más importante es la Base Aérea de **Tres Esquinas**, que cuenta con 1 500 hectáreas sobre el margen izquierdo del río Orteguzaza, en la que confluye el río Caquetá. Resguardada por espesa selva, ríos y pantanos, es habitada por más de 100 mil efectivos del ejército y la

⁴³ Estos documentos son ya una tradición dentro de la política exterior norteamericana. Son realizados por miembros del Partido Republicano que pertenecen al Grupo de Santa Fe, que dictan los lineamientos que han de seguir las acciones realizadas fuera de su país. Son tan influyentes que muchas de esas líneas se convierten en objetivos políticos de la administración en curso. El Santa Fe IV, elaborado por Gordon Summer Jr., Rachel Erenfeld, David Foster, Sol Sanders, y el geopolítico Lewis A. Tambs se dio a conocer recién empezaba la presidencia de George Bush hijo.

⁴⁴ Después creció hasta tener 97 instructores militares e incluso fue inaugurada por Peter Pace, el jefe del Comando Sur.

policía antinarcóticos y da acogida a la más grande fuerza de élite del país: 8 000 hombres de la Fuerza Aérea Conjunta y el recién creado batallón antinarcóticos apoyado por otras fuerzas y la policía nacional. Cuenta con una pista de aterrizaje de más de 2000 m de longitud y posee equipos de inteligencia y tecnología de punta en comunicaciones para recibir imágenes satelitales e interceptar señales de radioteléfono en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas. Controla además las estaciones de radar de Tres Esquinas, Marandúa, Araracuara, y Mecana. (*Ibid*:143) En esta base fueron instalados los receptores de señales que envían los satélites, los aviones y las tropas de élite de tierra con el fin de coordinar un comando de inteligencia que eventualmente proporcionaría información inmediata para y sobre el desarrollo de las operaciones.

Desde Tres Esquinas, Washington ofrece apoyo de alta tecnología en materia de información satelital y de aviones radar que han sido fundamentales para detectar grandes movimientos de tropa guerrillera y propinar a las FARC duros golpes, apoyados en los paramilitares⁴⁵. Para estos efectos, la base de Tres Esquinas se ha convertido en un verdadero centro de inteligencia tecnológica que pone a las fuerzas armadas colombianas entre las más modernas de Latinoamérica, lo que se comprobó una vez roto el diálogo con las FARC, pues los ataques a los guerrilleros se efectuaron desde aviones OV-10, AT-37, K-fir y helicópteros BlackHawk y UH-60, procedentes de la base de Tres Esquinas, donde Estados Unidos tiene tropas acantonadas.

Una intervención en Colombia, movería toda la estructura regional de seguridad controlada por el Southcom⁴⁶ con la participación de otras agencias estadounidenses como la DEA, se afianzaría en las Forwards Operating Locations (FOLs) para el control aéreo. El papel de las FOLs es vital en la conformación de una estructura de seguridad aérea capaz de cubrir la región andina-amazónica del Caribe y Centroamérica. Por ello el Comando Sur ha establecido tres: la de Manta —que es la única con capacidad de cobertura sobre los países andinos y que es la base del sistema de alarma aerotransportado— y las de Reina Beatriz en Aruba y Hato en Curazao,⁴⁷ que monitorean todo el norte de las zonas fuente de narcotráfico —Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia—incluyendo la península de la Guajira y Venezuela, además de que controlan el Pacífico que bordea a Centroamérica y toda la región. A estas bases, colocadas a una prudente distancia del teatro de operaciones, se suma la de El Salvador.

El cubrimiento de las FOLs se vería acrecentado por las bases militares de Estados Unidos instaladas en Roosevelt Roads (Puerto Rico), Bahía de Guantánamo (Cuba) y Soto Cano (Honduras). Otro punto clave de esta estrategia es la base militar que Estados Unidos montó en Iquitos, en la Amazonia peruana, en los valles del Alto Huallaga y el Apurímac-Eme cerca del río Nanay, hacia donde fue

⁴⁵ Por ello, en su informe del 2001, Human Right Watch acusó a quienes dirigen esta base de entregar armas, uniformes y datos de inteligencia a un grupo paramilitar.

⁴⁶ Este comando tiene su origen en 1903, cuando los primeros marines estadounidenses llegaron a Panamá para proteger el istmo. En 1917, las fuerzas armadas estadounidenses activaron un Departamento del Canal de Panamá como un comando geográfico. La importancia de este paso se hizo tan evidente en este periodo de guerras mundiales que para diciembre de 1946, el presidente Harry Truman aprobó el establecimiento de un sistema de comandos militares enlazados que colocaran a las todas fuerzas armadas dentro de una región geográfica bajo un comando unificado al mando de un solo general. Uno de estos comandos, el Comando de Caribe (Caribbean Command), tenía la responsabilidad del área caribeña, de América Central y de Sudamérica. En junio de 1963, el Secretario de Defensa rediseñó el Caribbean Command y lo convirtió en el Southern Command (Southcom), que en enero de 1996 amplió su área de responsabilidades (Area of Operational Responsibility, AOR), con lo que se hacía cargo del control militar de la región del Caribe, del Golfo de México y de algunas porciones de los océanos Atlántico y Pacífico. El número de países de su AOR aumentó de 19 a 32 y en 1997 su sede se movió de Panamá a Miami, con una subsele en Puerto Rico. Después de los sucesos del 11 de septiembre en los Estados Unidos, los comandos regionales sufrieron una transformación. Ante la necesidad, a decir del Pentágono, de cuidar mejor las fronteras estadounidenses, se creó el Northcom (Comando del Norte), el cual empezará a operar en octubre 1 de 2002 en la Base Peterson de la Fuerza Aérea, en Colo. Este nuevo comando quita al Southcom la responsabilidad de cuidar las aguas del Golfo de México, lo que corresponde al territorio cubano y una parte del Océano Atlántico, a la misma altura de Cuba.

⁴⁷ Estas bases cumplirán la función de apoyo logístico según el convenio suscrito en abril de 1999 entre el Reino de Holanda y Washington. En ambas bases habrá una presencia constante de 300 militares de Estados Unidos de manera rotativa así como 5 aviones F-15 y F-16 y tres aeronaves de reconocimiento y un máximo de ocho aviones adicionales.

desplazado parte del equipo que el Pentágono tenía instalado en la Base Howard, en Panamá.⁴⁸ Esta base peruana aporta el apoyo naval tan necesario para internarse en la selva, pues cuenta con lanchas rápidas donadas por el gobierno estadounidense. Bolivia tampoco escapa a la ocupación militar estadounidense. Tres cuarteles diseñados por ingenieros militares bolivianos y técnicos estadounidenses del Southcom serán erigidos en el Chapare, en las localidades de Villa Tunari, Ichoa y Chimoré. Estos cuarteles permitirán reactivar la Novena División del Ejército boliviano, que tendrá a su cargo el fin de la erradicación de coca y que será entrenada por personal estadounidense de distintas agencias gubernamentales.⁴⁹

Además de las ventajas geopolíticas obtenidas con el reposicionamiento estratégico de sus bases militares en la región andina, en Centroamérica y en el Caribe, las empresas fabricantes de armas de los Estados Unidos, subsidiadas por el gobierno estadounidense, se mantienen como las mayores vendedoras de estos productos a nivel mundial gracias en gran parte a la cruzada antidrogas que ha emprendido su país, que es más bien una coartada para no responder a la opinión pública internacional por la masiva producción de instrumentos de guerra en un mundo que, supuestamente, con el fin de la guerra fría, había alcanzado la paz.

El enfrentamiento entre distintos grupos de poder en Colombia en general y el Plan Colombia en particular muestran con claridad lo jugoso del negocio de las armas. En este país, hay 40 mil efectivos armados de las guerrillas; 10 mil paramilitares; 180 mil de la fuerza pública y más de un millón de colombianos que poseen armas de alto poder. (Vélez, 2001:59) Puesto que hay grupos armados al margen de la ley, muchas de estas armas entran de forma ilegal, generando un amplio mercado negro que se abastece mediante un tráfico está asociado a las rutas de los narcotraficantes. Así el ingreso ilegal de las armas a Colombia es por vía aérea, por las mismas rutas que utilizan los mismos aviones en los que se envía cocaína; por vía marítima, por el Golfo de Urabá, frontera con Panamá ; por vía terrestre, por la ruta de Ecuador (frontera norte), Brasil, Venezuela (frontera oeste) y Perú, lugar por donde llegaron hace ya unos dos años los fusiles de tipo AK-47 que Vladimiro Montesinos, mano derecha de Fujimori, les vendió a las FARC en una transacción que costó 15 millones de dólares. (Basombrío, 2003:182)

Por el lado legal están las armas que entran como apoyo directo a la lucha antidrogas. Hasta antes de la ejecución del Plan Colombia, Colombia estaba entre los primeros tres clientes directos del gobierno estadounidense y entre los primeros de las compañías estadounidenses de armamento. Si ya con esta situación las compañías fabricantes de armas se veían beneficiadas, con el Plan Colombia su situación se ve aún más favorecida.

En enero de 2000, la revista *Time* publicaba que los helicópteros caza-droga (fumigadores) Bell—fabricados por Bell Helicopter Textron— y Sikorsky —fabricados por United Technologies— que la administración Clinton mandó a Colombia para erradicar la coca y la heroína son justo los helicópteros para quienes sus fabricantes estaban buscando clientes hacía ya un largo tiempo ante la inminente amenaza de quiebra. La cuestión era fácil de entender: unos los necesitaban y otros los vendían. La Administración Clinton contemplaba el envío de 30 nuevos Sikorsky UH-60 BlackHawk, helicópteros de 10 millones c/u y 33 Bell UH-1 Hueys de la era Vietnam, de 1.5 millones cada uno.⁵⁰ Estos helicópteros son ideales para la misión: son capaces de sobrevolar la jungla a más de 160 kph y pueden aterrizar donde

⁴⁸ Con el traspaso de la zona del Canal de Panamá a manos del gobierno panameño, a fines de 1999 la sede del Southcom fue trasladada a Miami. La clausura de la Base Howard, en mayo de ese año, había disminuido marcadamente las operaciones de recolección de información de inteligencia. Desde ahí operaban los aviones de reconocimiento Awacs y otras sofisticadas naves espías como los Havilland RC-7. Las bases de Manta, Aruba y Curazao vendrían a sustituir la función de la base Howard, donde los aviones espías que tenían que volar grandes distancias y necesitaban reabastecerse de combustible y alojar a la tripulación.

⁴⁹ Muy poca gente sabe que en este país se encuentran las dos estaciones más importantes de la CIA en América Latina con más de 1000 agentes. (Dieterich, 2002:15)

⁵⁰ En los ochenta, el UH-60 BlackHawk comenzó a reemplazar a los UH-1H Huey como el principal medio de transporte táctico del Ejército de los Estados Unidos. Fabricado por Sikorsky Helicopter (una división de United Technologies), un BlackHawk cuesta aproximadamente de 12 a 16 mdd. Un Huey regular se puede convertir en un “super” Huey con el kit que vende su fabricante, Bell, que cuestan una séptima parte de lo que cuesta un BlackHawk.

sea, además de que pueden rociar herbicidas letales. (Moreano, 2002:5) El sector de las armas vio muy bien desde el principio la intervención estadounidense como una mayor oportunidad de crecimiento. Por ello, a nadie extrañó el fuerte cabildeo de United Technologies y Bell Textron, junto con las petroleras, para que el Congreso aceptara el paquete de ayuda del Plan Colombia.

El 70% de los 1 300 millones de dólares del Plan Colombia fueron de uso estrictamente militar y se destinaron a la compra de 60 helicópteros de combate, la formación y el equipamiento de batallones del ejército especializados en la lucha antidrogas y el suministro de materiales sofisticados. De este monto, alrededor de 900 mdd retornaron directamente a los Estados Unidos ya sea a los fabricantes de material de guerra, ya sea al Pentágono que garantiza la formación de los militares colombianos o bien a las sociedades encargadas de las operaciones de fumigación de las plantaciones afectadas. De esta forma, los helicópteros comprados con dinero de los contribuyentes estadounidenses ni siquiera son donados al gobierno colombiano. Son helicópteros que siguen siendo propiedad de los Estados Unidos, de una institución que se llama Agencia de Cooperación para la Seguridad y la Defensa. La erogación final será así: United Technologies ganará 234 mdd por la venta de 18 helicópteros BlackHawk; la empresa Bell Textron de Texas, obtendrá 84 mdd por la venta de 48 helicópteros Huey. Al grupo Lockheed Martin le tocarán 68 mdd por la venta de radares. (*Ibidem*)

Según el Plan Colombia, la intención de rociar los cultivos ilícitos es desaparecerlos y con ello “eliminar el negocio de las drogas que financia a la guerrilla”; sin embargo, como hasta ahora se ha visto, los helicópteros fumigadores forman parte de un esquema de guerra que pretende, en un primer momento, sacar a la guerrilla del territorio ocupado, sobre todo en el sur de Colombia, donde existen cerca de 79 mil hectáreas de coca, y en un segundo momento, hacerse de los territorios más ricos en petróleo y otros recursos naturales utilizando también la fumigación, pues los paramilitares se encargan de sembrar de cultivos ilícitos las zonas estratégicas. Siguiendo esta lógica de guerra química, podemos entonces asegurar que los herbicidas utilizados por los caros helicópteros estadounidenses son también armas.

Entre noviembre de 2000 y mayo de 2001 se hizo el bombardeo químico en 44 mil hectáreas, pero el total de hectáreas perdidas es de por lo menos un millón si contamos las que se deforestaron primero para sembrar drogas, las que fueron envenenadas luego mediante la fumigación y finalmente abandonadas para llevar más lejos los cultivos y las nuevas hectáreas sembradas. El gobierno estadounidense pagó 33 mdd por el herbicida y otros 35 mdd por gastos de operación a Monsanto —a quien sí no—, compañía que produce el Round Up y Round, donador de la campaña presidencial de George Bush. A final de cuentas, por medio del negocio legal de las armas, los Estados Unidos subsidian a las compañías productoras de material bélico amparados en la noción de que la guerra es un buen negocio, sobre todo cuando se tiene una balanza comercial deficitaria. El fortalecimiento de la hegemonía estadounidense en América Latina y en los Andes y la cuenca amazónica, cruza así con dos de los negocios ilegales más grandes —el narcotráfico y el tráfico de armas—, cuyos mayores frutos son recogidos por los bancos estadounidenses y los fabricantes de armas de la misma nacionalidad.

Resulta así evidente que esta virtual ocupación de América Latina es la que le permitirá a los Estados Unidos conseguir sus objetivos en la región, entre los que se cuentan los siguientes: conseguir recursos naturales estratégicos para su “seguridad nacional”; acabar con todo movimiento subversivo que se oponga a la “globalización” de las corporaciones transnacionales; asegurar la concreción del ALCA, así sea a fuerza de intimidar a los países latinoamericanos renuentes a las condiciones de los capitales estadounidenses y de convertir al Pentágono en el brazo armado de los intereses del capital en América Latina; crear una fuerza militar unilateral con el mismo esquema de la OTAN para intervenir con mayor facilidad en los países latinoamericanos que reten su poder; y, por último, reforzar su hegemonía en el continente y proyectarla hacia sus rivales económicos y posibles sucesores hegemónicos.